mensual/marzo 1982
nueva serie/número 27

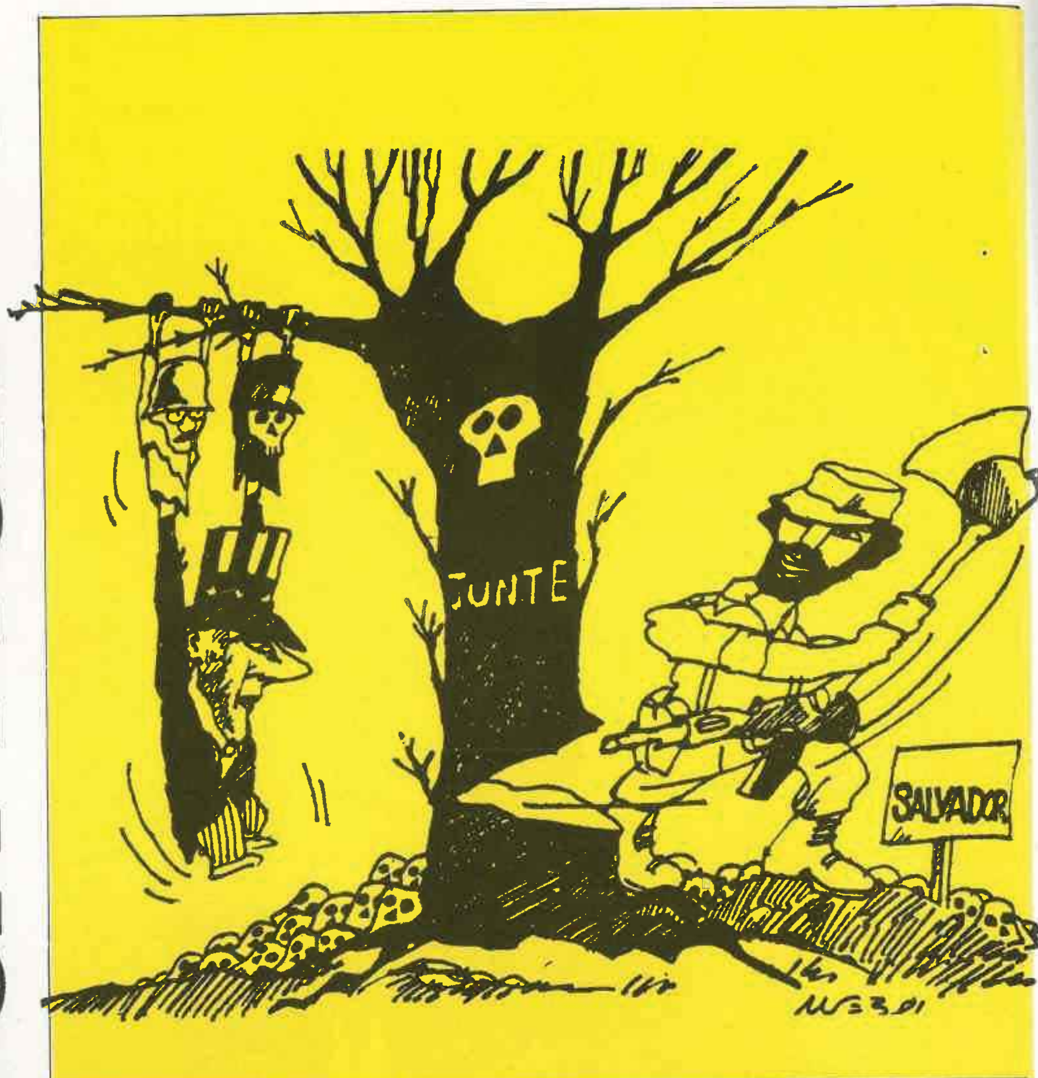
inprecor

correspondencia de prensa internacional / intercontinental press


El Salvador

Guerras civiles y
AMERICA CENTRAL
farsas electorales

Sumario



* América Central

El imperialismo quiere hundir a la región en sangre y fuego

La escalada de la intervención del imperialismo yanqui en América Central se precipita por momentos. Frente a los recientes éxitos de las fuerzas de liberación en El Salvador y Guatemala, la Administración Regan amenaza ya abiertamente con una intervención militar directa. Como demuestran las recientes elecciones de Honduras, las farsas electorales previstas para el mes de marzo en El Salvador y Guatemala no podrán resolver nada.

Manifiesto del FMLN al pueblo salvadoreño y a todos los pueblos del mundo

Edita:
Liga Comunista Revolucionaria
(IV Internacional)

apdo. de Correos, 50.370
(Cibeles) Madrid
Imprime Ratlles. Mallorca, 206
Barcelona Dep. Leg. 40029/79

Polonia

Revolución y contrarrevolución política en Polonia



Declaración del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional sobre los antecedentes del golpe del general Jaruzelski en Polonia, la situación actual y las tareas del movimiento obrero internacional en solidaridad con Solidarnošc.

página 12

*Francia

Nueve meses de gobierno de izquierda

Contrariamente a las predicciones de la burguesía y sus partidos de la derecha, el acceso de la izquierda al poder en Francia no ha comportado ninguna catástrofe nacional. Y contrariamente a las esperanzas puestas por la clase obrera en el nuevo gobierno, este está dando largas y las reformas fundamentales que había prometido en su campaña electoral. No ha llegado aún el momento de una prueba de fuerzas con el capital, pero la burguesía está preparándose ya para ella.

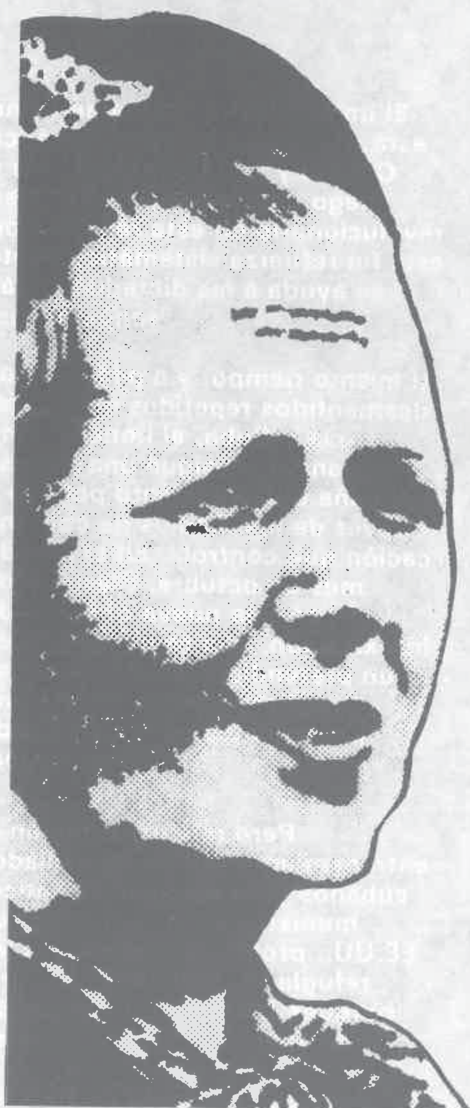
página 23

*Italia

El movimiento sindical frente al Pacto Social

El año 1981 fue en Italia un año de congresos sindicales y de amplios debates en el movimiento obrero. Celebrados en un contexto de grave crisis económica y de un violento ataque de la patronal contra el nivel de empleo, los salarios y la escala móvil, estos debates no han sido nada rutinarios en ninguna de las tres grandes confederaciones sindicales. Las cuestiones más generales de estrategia sindical se han relacionado estrechamente con las tareas inmediatas y con las opciones políticas planteadas para hacer frente a la ofensiva patronal.

página 26



*Gran Bretaña

El balance del Thatcherismo

Las recientes victorias electorales del Partido Socialdemócrata en coalición con el Partido Liberal y la pérdida de votos del Partido Laborista por un lado, y el avance de la izquierda en algunos sindicatos por otro, constituyen dos elementos contradictorios de la situación política actual en Gran Bretaña. De hecho, la clase dominante británica está a la búsqueda de una alternativa al fracaso ya patente de la política del gobierno Thatcher. Dada la inestabilidad del laborismo y la radicalización de muchos de sus cuadros, el SDP aparece hoy como la alternativa más probable que favorecerá la burguesía.

página 34

El imperialismo norteamericano está decidido a hundir a América Central y el Caribe en sangre y fuego para detener el ascenso revolucionario en esta región. Con este fin refuerza sistemáticamente su ayuda a las dictaduras más sanguinarias.

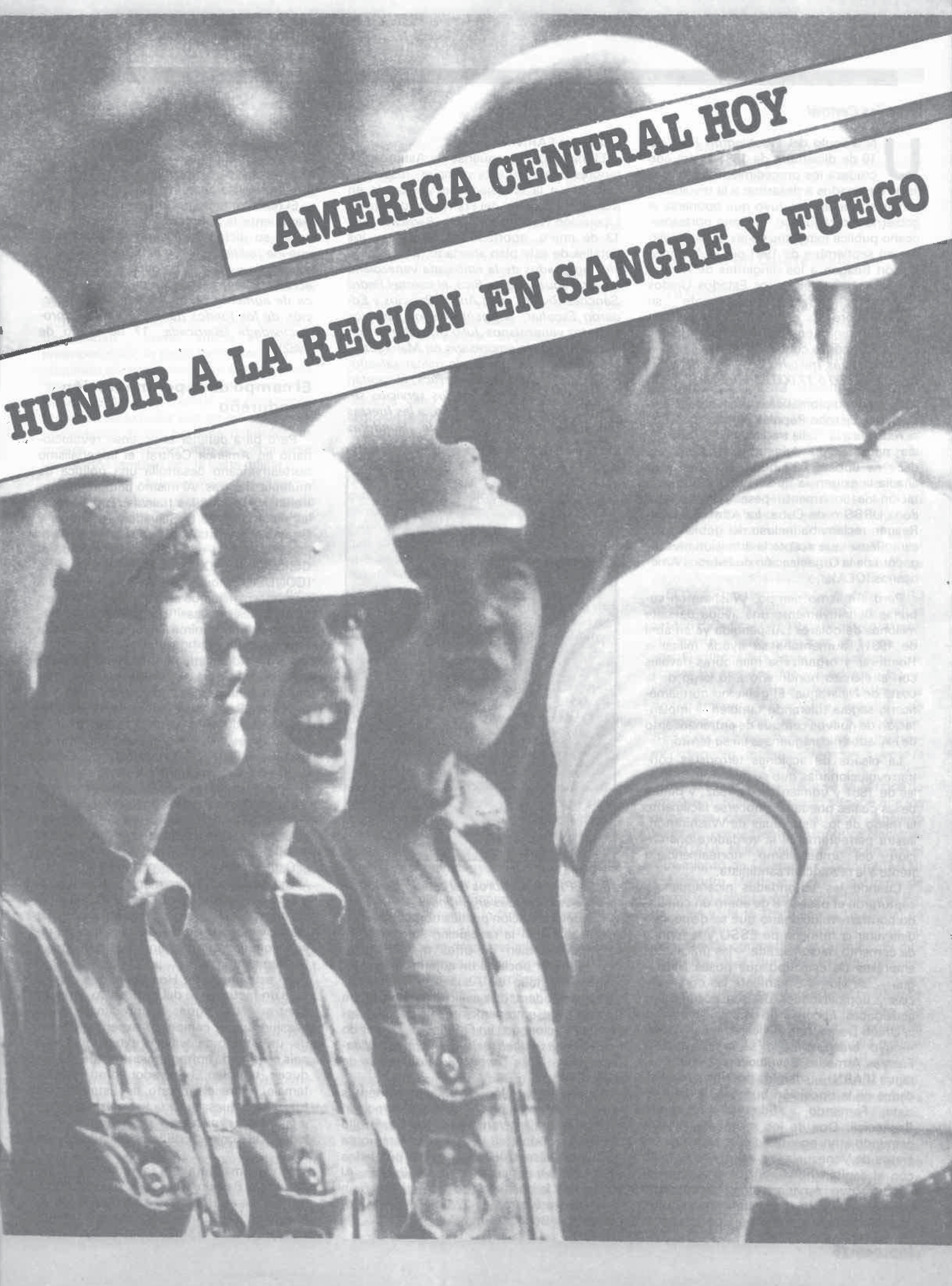
Al mismo tiempo, y a pesar de los desmentidos repetidos de Nicaragua y Cuba, el imperialismo yanqui prosigue una intensa campaña de aislamiento político a través de los medios de comunicación que controla. En el pasado mes de octubre, Washington lanzó una nueva ofensiva de intoxicación, que se concentró en un pretendido "aflujo de armas sofisticadas" a Nicaragua, procedentes de la URSS y de Cuba.

Pero mientras toleran el entrenamiento militar de exiliados cubanos y nicaraguenses anticomunistas en su territorio, los EE.UU., prohíben la entrada a los refugiados haitianos. El diario burgués francés *Le Figaro* del 26 de enero de 1982 no duda en afirmar al respecto que el desembarco fracasado en Haití de un comando dirigido por Bernard Sansaricq sólo sería un "bluff" montado por los EE.UU. para justificar el aumento de su ayuda a Baby Doc.

Entrenamiento de militares salvadoreños en la tortura; formación de soldados y oficiales guatemaltecos en la táctica contrainsurreccional aplicada ya en Vietnam; maniobras electorales para quitar hierro a las contradicciones sociales en Honduras; presiones múltiples contra Nicaragua, Cuba y Granada; y apoyo abierto a la dictadura de Baby Doc en Haití, estos son algunos de los elementos de la política actual del imperialismo norteamericano.

Vincent Kermel




AMERICA CENTRAL HOY
HUNDIR A LA REGION EN SANGRE Y FUEGO

UN artículo del *Washington Post* del 10 de diciembre de 1981 aclara con crudeza los procedimientos imperialistas destinados a desarmar a la revolución sandinista, a las que tuvo que oponerse el gobierno nicaragüense. El diario norteamericano publica extractos de las cartas enviadas en septiembre de 1981 por la Administración Reagan a los dirigentes de Nicaragua. En una de ellas, los Estados Unidos proponen "reforzar vigorosamente" su control sobre los exiliados nicaragüenses que se entrenan en campamentos militares en Florida, con la condición de que *«se limiten las fuerzas militares regulares de Nicaragua a 15.000 ó 17.000 hombres»*.

Otra nota diplomática expresaba el deseo de que el Ejército Popular Sandinista (EPS) se reduzca a la "talla tradicional" de la guardia nacional de Anastasio Somoza, es decir, a unos 8.000 hombres. A ello se añadía la exigencia de suspender la importación de armamento pesado procedente de la URSS o de Cuba. La Administración Reagan reclamaba incluso del gobierno nicaragüense que acepte la comisión investigadora de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Pero al mismo tiempo, Washington suprimía definitivamente una ayuda de siete millones de dólares (suspendida ya en abril de 1981), aumentaba su ayuda militar a Honduras y organizaba maniobras navales con el ejército hondureño a lo largo de la costa de Nicaragua. El gobierno norteamericano seguía tolerando también la implantación de nuevos campos de entrenamiento de exiliados nicaragüenses en su territorio.

La oleada de acciones terroristas contrarrevolucionarias que se desarrolló a finales de 1981 y comienzos de 1982, y detrás de las cuales puede reconocerse fácilmente la mano de los estrategas de Washington, ilustra perfectamente la verdadera orientación del imperialismo norteamericano frente a la revolución sandinista.

Cuando las autoridades nicaragüenses capturaron el pasado 8 de enero un comando contrarrevolucionario que se disponía a dinamitar la refinería de ESSO y la fábrica de cemento nacionalizada —las únicas dos empresas de este tipo que posee Nicaragua—, se vieron claramente las connivencias y complicidades de que gozan estas actividades. El comando estaba vinculado a la Unión Democrática Nicaragüense (UDN) —cuyo brazo armado se autodenomina Fuerzas Armadas Revolucionarias de Nicaragua (FARN)—, dirigida por dos personalidades de la oposición burguesa antisomocista, Fernando y Edmundo Chamorro Rapaccioli. Dos de los miembros de este comando eran agentes de los servicios secretos de Venezuela, en estrecho contacto con el capitán hondureño Alexander Hernández, que serviría como intermediario para establecer una colaboración entre la misión militar argentina en Honduras y la UDN y las FARN...

El ministro nicaragüense de Asuntos Exteriores denunció este complot, responsabilizando a la embajada de Venezuela en Managua. El diario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), *Barricada*, del 13 de enero, aportaba las pruebas y los detalles de este plan abortado, acusando a *«los agregados de la embajada venezolana en Nicaragua y Costa Rica, el coronel Pedro Sánchez Rivero, José Aníbal Palacios y Edgardo Escobar, al agente de los servicios secretos venezolanos Julio González Ferrón —disfrazado de empresario en Managua— a Eduardo Avila, agregado militar salvadoreño en San José de Costa Rica, al capitán Alexander Hernández, de los servicios secretos del ejército hondureño, a las fuerzas especiales de seguridad de Honduras (FUSEP) y a miembros del estado mayor de las fuerzas armadas argentinas»*.



La determinación política norteamericana de acabar con la revolución sandinista se expresa también de otras maneras. Por ejemplo, por boca de un adjunto del secretario de Estado de Asuntos Americanos, Thomas Enders, que avaló la instalación de campos de entrenamiento militar de contrarrevolucionarios en Florida, proclamando que *«no es ilegal realizar ejercicios militares» (New York Times,* 23 de diciembre de 1981).

O con la decisión de los representantes norteamericanos en el Consejo de dirección de la Banca Interamericana de Desarrollo (BID) de oponer su veto a un préstamo de 500.000 dólares destinado a los pequeños ganaderos y agricultores nicaragüenses. Al comentar la oposición norteamericana a un segundo préstamo de 22,8 millones de dólares del Banco Mundial a Nicaragua, el portavoz del Departamento de Estado, Sue Pittman, anunció nuevas iniciativas norteamericanas para impedir la concesión de créditos a Nicaragua.

El representante norteamericano expresó claramente la voluntad imperialista de imponer su dictado a Nicaragua, añadiendo que *«la política nicaragüense de expansión monetaria y fiscal y de déficit del ejercicio actual, debería ser sustituída por otra política de aumento de las inversiones, restricción de los fondos públicos y de alta productividad» (Barricada,* 17 de enero de 1982).

El campo de experimentación hondureño

Pero para detener el ascenso revolucionario en América Central, el imperialismo norteamericano desarrolla una política de múltiples facetas. Al mismo tiempo que entrenan y arman a las fuerzas represivas de las dictaduras de El Salvador, Honduras y Guatemala, y establecen una estrecha cooperación militar entre ellas, reactivando el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), los Estados Unidos afirman a bombo y platillo que en estos países apoyan "soluciones políticas" destinadas a proporcionarles una mínima legitimidad a escala internacional.

Así, la Administración Reagan multiplica las presiones para que se celebren elecciones en Guatemala el 7 de marzo y en El Salvador el 28 de marzo, una vez celebradas las de Honduras, el pasado 29 de noviembre, donde salió vencedor el dirigente del Partido Liberal (PL), Roberto Suazo Córdova, nuevo presidente de Honduras. En lo que se refiere a El Salvador, esta fórmula ha obtenido incluso el aval, a comienzos de diciembre, de la mayoría de miembros de la OEA, reunidos en Asamblea general en la pequeña isla de Santa Lucía, en el Caribe.

Sin embargo, estas maniobras electorales sólo constituyen un aspecto del plan contrarrevolucionario destinado a aplastar los movimientos de masas y las fuerzas revolucionarias que luchan en El Salvador y Guatemala.

En este contexto, Honduras, que constituye un factor clave del dispositivo agresivo contra Nicaragua, representa para Washington el campo de experimentación de un intento de evitar la extensión a este país del tipo de enfrentamientos que se producen, tanto en El Salvador como en Guatemala, entre el aparato de Estado y las fuerzas burguesas *«cada vez más reducidas a las fuerzas militares y represivas»* por un lado, y el conjunto de la sociedad civil por otro.

El voto mayoritario a favor de los candidatos del Partido Liberal, el pasado 29 de noviembre en Honduras, con motivo de las segundas elecciones que conoce el país

desde 1932, tiene un doble significado. Por un lado, es la expresión de la voluntad popular de llevar al poder a un candidato civil, aparentemente menos vinculado a los militares que su contrincante del Partido Nacionalista (PN). Por otro lado, refleja también el importante retraso que se da en la conquista de la independencia de clase del movimiento popular de un país que figura, detrás de Haití, entre los más pobres del continente.

Si Honduras no es un "oasis de paz y tranquilidad", como afirma la prensa proimperialista, la polarización social no ha adquirido allí aún la forma de enfrentamientos militares, como sucede en los demás países de América Central. La hegemonía burguesa se expresa aún en este país en la dominación de los partidos políticos burgueses, que disponen aún de cierta base, vinculados también con la casta militar.

A pesar del régimen militar en vigor, el movimiento obrero y popular ha podido expresarse hasta ahora mediante huelgas legales y manifestaciones. Por ejemplo, en 1980, más de 9.000 trabajadores del plátano entraron en lucha contra los trusts norteamericanos Tela Railroad Company y Standard Fruit Co., ocasionándoles pérdidas por un valor de más de un millón de dólares. Sin embargo, el movimiento obrero y popular hondureño, pese a su combatividad, sólo está en el comienzo de un proceso de emancipación política frente a las formaciones burguesas.

En el contexto económico actual, con una inflación del 33% en 1981, un paro que afecta al 25% de la población activa, un descenso de las cotizaciuones mundiuales de los productos agrarios, una fuga de capitales y una disminución de las reservas de divisas del Estado, el nuevo gobierno, que entró en funciones el 27 de enero de 1982, sólo podrá aplicar una política de brutal austeridad y de ataque al nivel de vida de las masas, lo que probablemente no logrará atenuar las tensiones sociales existentes.

Titular él mismo de una de las diez fortunas más importantes del país, el dirigente liberal Roberto Suazo Córdova consagró además sus primeras declaraciones, una vez elegido, al afirmar su acatamiento al ejército y a los Estados Unidos. *«Estoy plenamente convencido,* declaró, *que el pueblo hondureño y el Partido Liberal iremos mano a mano con el ejército para preservar la paz y la tranquilidad. (...) Lo que no permitiremos aquí es la subversión que ha devastado a El Salvador y Guatemala»,* y para ello estima que *«la presencia militar de los Estados Unidos en América Central es necesaria».* Suazo Córdova acaba de avalar el nombramiento del coronel Gustavo Alvarez Martínez como comandante en jefe del ejército. Las primeras palabras del coronesl consistieron en denunciar el "complot comunista" contra Honduras y acusar a los refugiados salvadoreños de "subversión".

Los militares hondureños, que mantienen a Roberto Suazo Córdova y su gobierno bajo su estrecho control, y el imperialismo norteamericano, aceptan de buena gana a este presidente civil, máxime cuando no tendrá más remedio que aplicar su política. Sin embargo, en un país en que el 5% de la población posee aún el 61% de las tierras y donde el 22% de todas las tierras cultivables se concentran en 445 explotaciones de más de 500 hectáreas cada una, después de una "reforma agraria" impulsada en 1975 por los militares y fuertemente contestada por la oligarquía terrateniente, resulta difícil determinar qué política de reformas puede llevar a cabo un gobierno que depende tanto de la burguesía y del imperialismo.

El diario *International Herald Tribune* del 21 de diciembre de 1981 destaca esta contradicción, al afirmar que el gobierno tendrá que *«desarrollar un programa de austeridad que tensará sus relaciones con el pueblo, tomar medidas contra la corrupción que enfurecerá a los militares, y aplicar las leyes que ya existen sobre la reforma agraria, lo que le alejará de los grandes propietarios terratenientes».* El programa de gobierno de Roberto Suazo Córdova, que prevé la aplicación de la reforma agraria de los militares y que propone un *«plan de acción para relanzar la economía nacional»,* se enfrentará así muy pronto con las reivindicaciones populares, en un momento en que la patronal, agrupada en el comité hondureño de la empresa privada (COHEP), llama ya a un *«auténtico plan de austeridad del sector público»* y propone resolver la cuestión agraria sin *«atentar contra las propiedades que cumplen sus funciones sociales».*

El nuevo gobierno tampoco escapará a las consecuencias de la polarización social actual en el resto de la región, al mismo tiempo que tampoco se liberará del papel contrarrevolucionario que asigna el imperialismo a las fuerzas represivas hondureñas. Estas, encuadradas por 150 consejeros norteamericanos, participan en el establecimiento a lo largo de la frontera con El Salvador, de una auténtica "tierra de nadie", que consiste en desplazar a las poblaciones refugiadas para ayudar al ejército salvadoreño a atenazar a los guerrilleros del FMLN.

El capitán hondureño Mejía Flores, que dirige las tropas de la región de La Virtud, ha reconocido al respecto que *«las fuerzas militares de los dos países, de común acuerdo con los consejeros norteamericanos, han decidido militarizar la zona fronteriza».* El movimiento popular de liberación Chinchoneros (MPL) acaba de denunciar un plan al informar de la llegada a Honduras de *«soldados y oficiales de las fuerzas armadas de Argentina, Chile y Venezuela, para colaborar con las tropas locales en las acciones contra las guerrillas salvadoreñas»,* bajo la cobertura del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Por lo demás, el ejército y el gobierno de Honduras forman parte activa de las acciones contra la revolución sandinista.

Vietnamización de la situación en Guatemala

En Guatemala, la mascarada electoral del 7 de marzo va a desarrollarse dentro de un verdadero contexto de vietnamización de la situación. Estas elecciones apenas tendrán mayor representatividad que las que alzaron a la presidencia al general Romeo Lucas García en 1978, con un índice oficial de abstenciones del 63,5% de los votantes.

Sin embargo, los Estados Unidos han hecho todo lo posible para dar cierta credibilidad a estas elecciones. Washington ha intentado en particular, aunque en vano, que el ejército y el gobierno apoyen a un candidato civil. Finalmente, será el ex ministro de Defensa, el general Aníbal Guevara, el que será investido oficialmente por el ejército y el Frente Democrático Popular (FDP), que es como se denomina la alianza de los dos partidos reaccionarios oficiales.

El diario guatemalteco *La Nación*, del 13 de diciembre de 1981, expresa muy bien la actitud de los militares y de la extrema derecha frente a estas presiones norteamericanas. El editorialista observa, en efecto, que *«todos los partidos, los candidatos a la presidencia y el gobierno, deben asumir una posición clara e inequívoca de independencia y ejercicio de la soberanía. Seràn los guatemaltecos, y no los norteamericanos, los que decidirán con su voto la elección del nuevo gobierno».*

Por lo tanto, el resultado ya se conoce de antemano. Máxime cuando se sabe que los otros tres candidatos, Gustavo Anzueto Vielman, por la Central Auténtica Nacionalista (CAN), Mario Sandoval Alarcon, por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y Alejandro Maldonado, por la Unión de Oposición (alianza del Partido Nacional Renovador y de la Democracia Cristiana) se caracterizan por su anticomunismo y su voluntad de combatir a la guerrilla. El dirigente del MLN, que se presenta como *«la punta de lanza de la lucha contra el comunismo»,* declaró no *«aceptar el calificativo de fascista, en el sentido histórico del término, pues lo que implica es la referencia a una forma de socialismo, aunque sea nacionalista».*

El Frente Unido Revolucionario (FUR), que se reivindica de la socialdemocracia, ha renunciado fielmente a participar en estas elecciones.

En efecto, ¿qué pueden significar estas en un país que se encuentra en plena guerra civil? Pues es esto de lo que se trata.

El Comité de Libertad Sindical de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar un informe en el que

afirma que *«más de 40 personas desaparecen todos los días en Guatemala. Muchas de ellas con dirigentes sindicales o personas que participan en las movilizaciones de los trabajadores».*

Según el *International Herald Tribune* del 20 de enero, *«las autoridades religiosas estiman que este año han sido asesinados 11.000 civiles, la mayoría por elementos de las fuerzas armadas gubernamentales o grupos paramilitares».* La violencia de la represión va a la par con la radicalización popular y la extrema polarización económica y social de un país en que *«el 2% de la población percibe el 25% de la renta nacional, mientras que el 50% del escalón inferior reciben solamente del 10 al 15%, según un informe de la embajada norteamericana».*

Los indios, que constituyen aproximadamente la mitad de los 7,2 millones de habitantes, forman la mayoría de las capas populares. En el campo, la mortalidad infantil es del 160 por mil; cuatro niños campesinos de cada cinco están subalimentados. Por tanto, no resulta sorprendente que las comunidades indias sean desde hace años los bastiones de la guerrilla rural.

La dictadura militar intenta impedir el paso masivo de las poblaciones indias al lado de la guerrilla, fomentando la oposición racial entre los indios y los metizos (ladinos). Esto le lleva incluso a armar a algunas aldeas de colonos ladinos, como sucedió en la región de Rapinal y en las aldeas alrededor de Joyabaj, en la provincia de Quiche. Pero lejos de detener la extensión de la influencia de las fuerzas guerrilleras, estas maniobras acentúan aún más la oposición contra la dictadura por parte de las masas rurales indias.

Así, más allá de la mascarada electoral, la dictadura guatemalteca continúa armándose. Apenas tiene dificultades para recibir suministros de los Estados Unidos, a pesar de las resoluciones parlamentarias que prohíben tales transacciones, o entre los aliados del imperialismo yanqui como Israel. El *International Herald Tribune* del 25 de enero de 1982 informa a este respecto que en 1980 y 1981, el ejército guatemalteco gastó cerca de 10,5 millones de dólares en la compra de helicópteros civiles —tres Bell 212 y seis Bell 412— equivalentes a los helicópteros de guerra Huey. Estos helicópteros fueron vendidos con la aprobación del Departamento de Comercio norteamericano y sin previa consulta al Departamento de Estado. Desde entonces, dos de ellos ya han sido equipados con ametralladoras del calibre 30.

En cuanto a Israel, además de la venta tradicional de armas (en particular, el fusil de asalto Galil), también ha *«abierto recientemente una escuela de comunicaciones militares en Guatemala para entrenar a los técnicos de comunicación por radio, y donde los cursillos de instrucción corren a cargo de consejeros israelíes».*

A finales de diciembre, las autoridades de ciudad Guatemala anunciaron también que iban a triplicar los efectivos del ejército para 1982. Así, las fuerzas armadas alcanzarán la cifra de 60.000 hombres, tan sólo entre las fuerzas regulares.

Todo ello no ha impedido que el comienzo del año 1982 se haya caracterizado por un aumento de las actividades de la guerrilla, que ha lanzado una docena de operaciones en el primer fin de semana de enero. A finales de diciembre murieron cinco policías en la capital, y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) ocupó dos ciudades del interior el 24 de diciembre. A causa de la guerra, en las regiones de Quiche, Huehuetenango y San Marcos, el comercio privado está practicamente paralizado. Sólo pueden circular los transportistas que aceptan pagar un impuesto de guerra a la guerrilla.

A comienzos de diciembre, la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) ocupó temporalmente la localidad de Ostuncalco, que se encuentra a solamente 10 minutos por carretera de Quetzaltenango, segunda ciudad del país y principal base militar. También se ha observado un aumento de la coordinación entre las distintas organizaciones guerrilleras, que han desempeñado todas un papel importante en las acciones espectaculares del mes de diciembre en Solola, Escuintla y Mazatenango.

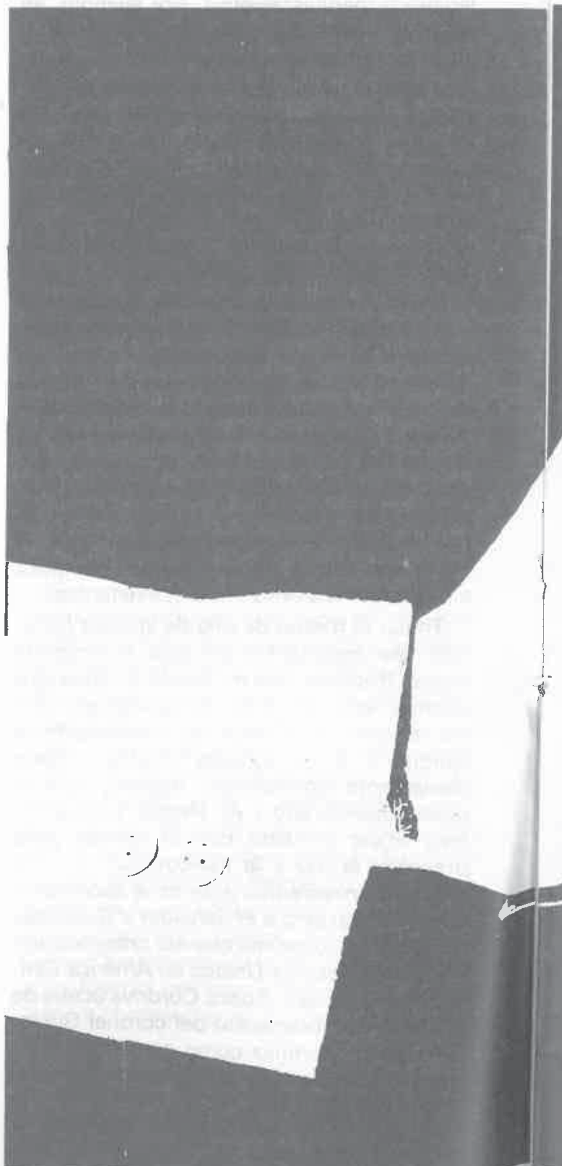
Pero si la estrategia de la dictadura —bombardeo de las zonas controladas por la guerrilla y armamento de algunas aldeas ladinas— se inspira cada vez más en las prácticas norteamericanas de Vietnam, la guerrilla también he aprendido de la experiencia vietnamita. Las tropas gubernamentales que penetraron en Joyabaj tras una incursión aérea, pudieron descubrirlo oara su sorpresa, al apercibirse de que casi todas las casas de la aldea tenían una trampa disimulada.

Elecciones para encubrir un genocidio en El Salvador

En El Salvador, tras el fracaso de la ofensiva del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en enero de 1981, la dictadura esperaba poder derrotar o al menos debilitar considerablemente a la guerrilla para promover su "solución política" electoral. Los intentos infructuosos de reducir las zonas ocupadas por los guerrilleros en la primavera de 1981, y posteriormente el relanzamiento de amplias acciones del FMLN a partir del verano pasado, han mostrado el carácter ilusorio de este proyecto.

Así, según el FMLN, el Pentágono ha solicitado a sus estrategas que elaboren un plan militar que llevaría a la operación lanzada recientemente en el departamento de Morazán. Ya no se trataba de aniquilar a la guerrilla, sino de asestar un golpe al corazón de la regiones que habitualmente escapan al control del gobierno. El fracaso del intento de destruir a *Radio Venceremos* sancionó la precariedad de esta nueva táctica. Sin embargo, debido a las masacres de la población que se producen con motivo de estas operaciones, contribuyen a incrementar a sabiendas el número de refugiados civiles. Con la colaboración de las tropas hondureñas, la dictadura y el imperialismo esperan así coger entre dos fuegos las zonas liberadas de la guerrilla. La última "sutileza" de la táctica contra-insurreccional de los consejeros norteamericanos en El Salvador consiste en secuestrar a los parientes próximos de los dirigentes del FMLN —como sucedió con el padre del comandante Villalobos— y achacar su desaparición a supuestos enfrentamientos entre "grupos extremistas rivales".

Con esta política de genocidio, los



Estados Unidos se mantienen resueltamente al lado de la Junta militar y democristiana de El Salvador, y comparten por tanto su sangriento balance. *Le Monde* del 20 de enero pasado informa que el número de muertos en dos años se cifra en aproximadamente 30.000, y el número de refugiados en 500.000. El 42% de la población salvadoreña es analfabeta, y el 93% de los niños de edad escolar sufren desnutrición. El Producto Nacional Bruto ha descendido en un 13% en cifras constantes desde diciembre de 1981. Las exportaciones en un 35% y las importaciones en un 23,3%.

Sin embargo, Washington, que ha asignado 10 millones de dólares de ayuda militar en 1981, prevé doblarla para el año en curso. La ayuda militar y económica norteamericana totalizaba 144 millones de dólares en 1981, y en 1982 deberá alcanzar los 250 millones de dólares. Y el imperialismo norteamericano no retrocede ante nada para tratar de alcanzar sus objetivos. Considerando sin duda que las masacres del ejército salvadoreño no eran suficientemente "aprovechadas" para permitir obtener informaciones, los "boinas verdes" norteamericanos entrenan a los oficiales y soldados salvadoreños en la práctica de la tortura "científica".

Carlos Antonio Gomez Montano, desertor de la unidad paracaidista de la base aérea de Ilopango, cerca de San Salvador, ha confirmado recientemente la presencia de instructores norteamericanos en las sesiones de entrenamiento para la tortura. *«Según Gómez,* observa el *International Herald Tribune* del 12 de enero de 1982, *ocho consejeros militares norteamericanos, algunos en uniforme verde oscuro y otros vestidos con monos para camuflarse, se mantenían en la sombra con el comandante de las fuerzas aéreas salvadoreñas y otros oficiales superiores salvadoreños durante las sesiones de tortura».*

En el marco de su estrategia de creación de un batallón de élite, los Estados Unidos anunciaron a mediados de diciembre el entrenamiento, cosa que no tiene precedentes, de 1000 soldados y 500 oficiales salvadoreños directamente en Fort Bragg, en Carolina del Norte, y en Fort Benning, en Georgia, en las unidades norteamericanas de "boinas verdes". Fred Ikle, subsecretario norteamericano de Defensa, reconocería que esta operación, que costará 18 millones de dólares, forma parte de la *"acción militar americana en América Central».* Este programa, que se inició en enero de 1982, debe permitir, siempre según Fred Ikle, *«ayudar a los salvadoreños a desarrollar una estrategia militar nacional».*



Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos belicistas, las autoridades norteamericanas reconocen las dificultades militares de la Junta salvadoreña. El embajador estadounidense en San Salvador le confió al corresponsal del diario italiano *La República* que la guerrilla progresaba, y su consejero, Ken Bleakeley, más locuaz, afirmó que *«ninguno de los dos bandos es capaz de derrotar al otro».* Las acciones del FMLN son cada vez más audaces. Así, el 27 de enero, un comando atacaba el aeropuerto militar de Ilopango, cerca de la capital.

El FMLN afirma que en esta ocasión destruyó "casi la mitad de la aviación salvadoreña", es decir, seis aviones Fouga Magister, 8 Ouragan, 6 aviones de transporte C-47 y 8 helicópteros Iroquois. Todos estos aparatos habían participado en la reciente operación contra la provincia de Morazan. El comando del FMLN que colocó las cargas explosivas en los aviones *«rindió homenaje a las miles de personas masacradas por el ejército»*

El imperialismo no puede esperar en absoluto que con las elecciones pueda lograr lo que no ha conseguido con las armas. El sacerdote salvadoreño Jesús Delgado declaró recientemente a este respecto que *«en las condiciones actuales, las elecciones sólo podrán ser la ocasión de un aumento de la represión y de la violencia».* De común acuerdo con la Junta, Washington parece que está planteándose el aplazamiento de las elecciones previstas para el 28 de marzo. Aunque esta nueva "táctica" de los Estados Unidos se confirme o no, no quita que la nueva política imperialista en El Salvador y en América Central de continuidad al apoyo decidido a las fuerzas que organiza la represión sangrienta del movimiento popular y de las fuerzas revolucionarias que luchan contra la dictadura.

Así, una parte importante del porvenir de la revolución mundial se juega actualmente en el subcontinente centroamericano. Depende de nuestra actividad de solidaridad internacionalista, ligada al combate de las masas populares centroamericanas, para imponer que el imperialismo norteamericano deje de hundir en sangre y fuego a los pueblos de esta región. ☐

Manifiesto del FMLN

"Al pueblo Salvadoreño y a todos los pueblos del mundo"

La heróica lucha que libra el pueblo salvadoreño contra la criminal Junta demo-cristiana, asombra al mundo y ha ganado el reconocimiento, respeto y solidaridad de todos los pueblos amantes de la paz y la libertad. en todos los continentes. El Salvador es hoy sinónimo de entereza, disposición y entrega total a la lucha de un pueblo que no retrocede, ni retrocederá ante la represión bestial ni ante las maniobras políticas de sus enemigos.

LA Junta militar democristiana y el gobierno de Estados Unidos, que es su amo y su padrino, están ahora realizando una sucia maniobra con las llamadas elecciones de Asamblea Constituyente convocadas para marzo de 1982. Pretenden engañar a la opinión pública mundial, la cual condena resueltamente la brutal matanza que realizan contra el pueblo salvadoreño y exige dar una solución política negociada a la crisis que sangra a nuestro país.

Las elecciones de marzo de 1982 no serán ninguna solución

Nadie cree sinceramente en las elecciones de marzo de 1982, en un país que sufrió los más escandalosos fraudes electorales de nuestro continente en los últimos decenios; y mucho menos hoy, cuando el gobierno asesina cada día entre 30 y 40 personas, como promedio, persigue y asesina a los dirigentes y activistas de los partidos políticos con larga trayectoria y raigambre en el pueblo, de los sindicatos, de las organizaciones campesinas y demás organizaciones populares, y mantiene el Estado de Sitio desde hace 21 meses; cuando la guerra sacude a la nación entera y hay más de 400 mil refugiados dentro y fuera del país, cientos de miles de personas viviendo en los teatros de operaciones militares; en una palabra, cuando el terror del genocidio se vuelca sobre el pueblo salvadoreño.

Está claro que en tales condiciones, afectan precisamente al pueblo trabajador y humilde, que es el que podría votar contra el gobierno; así sólo acudirían a las urnas la minoría dominante y un sector atemorizado de la población de las áreas bajo el criminal control del régimen fascista.

Tales elecciones no serían una solución; no puede haber solución sin el pueblo.

Nos hemos alzado en armas para asegurar un futuro de libertad y justicia; no han podido derrotarnos, ni siquiera con los crecientes suministros de armas y asesores militares yanquis a la Junta, y continuaremos combatiendo cada vez más resuelta y eficazmente.

No puede haber, ni habrá solución sin el movimiento revolucionario y democrático, ni en su contra.

Cuando a finales de 1980 se anunció el proyecto electoral, la dictadura fascista y sus amos imperiales calculaban que podrían derrotarnos militarmente, a más tardar en julio o agosto de 1981, de manera que habrían seis meses de postguerra para organizar una apariencia de paz y dar marco a la farsa en las urnas de marzo de 1982. Pero fue justamente en aquel momento cuando el FMLN dio muestras de su gran vitalidad, al incrementar su contínuo accionar combativo en todo el territorio nacional, llevado a cabo con éxito una importante campaña militar ofensiva.

Creció el reconocimiento y la Solidaridad mundial a nuestra lucha

En los días finales de agosto, Francia y México expresaron su reconocimiento al FMLN-FDR como fuerzas políticas representativas del pueblo salvadoreño; fueron apoyados luego por numerosos países, por la Internacional Socialista y otras organizaciones políticas, sociales y religiosas y diversos foros internacionales; todos ellos se pronunciaron a favor de una solución política por medio de negociaciones. Incluso el Senado de los Estados Unidos manifestó sus dudas sobre la conveniencia de insistir en el camino de la guerra, al probar en aquellos días una serie de condiciones para continuar prestando ayuda militar a la Junta asesina, mientras en numerosas ciudades norteamericanas continuaban sucediéndose las manifestaciones populares, exigiendo el cese de esa ayuda y solidarizándose con nuestro pueblo en lucha. En toda Europa, en América Latina, en el Medio oriente, en Africa y Asia creció a muy superiores niveles la solidaridad de los pueblos. El pueblo salvadoreño, su vanguardia el FMLN, el FDR, gozan del cariño y las simpatías mundiales.

El 7 de octubre, atendiendo a nuestra posición, el Comandante Daniel Ortega, Coordinador del Gobierno de Nicaragua, leyó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la declaración del FMLN-FDR en que ofrecimos nuestra disposición a negociar una solución política, en un marco de dignidad y garantías para el logro real de la paz justa, la libertad, la independencia y el progreso social a que tiene derecho el pueblo salvadoreño, por las cuales ha derramado y derrama tanta sangre.

El gobierno de Reagan decidió escalar su intervención y regionalizar la guerra. El acuerdo que arrancó a la OEA es un preparativo

Fue aquella, por tanto, una magnífica oportunidad para que el gobierno de Ronald Reagan realizara un cambio hacia una política de paz en Centroamérica, contando con amplio apoyo nacional e internacional; pero prefirió insistir en el camino de la guerra sucia contra el pueblo salvadoreño y continuar armando y apoyando políticamente a sus títeres fascistas. Desde aquel momento, las elecciones de marzo de 1982 pasaron a insertarse en la estrategia militar de Washington y la Junta, con una maniobra para legitimar el escalonamiento de su intervención militar, a la cual ha decidido arrastrar a los ejércitos reaccionarios centroamericanos y del Cono Sur, acercando así el peligro grave y cierto de la regionalización de la guerra, involucrando artificialmente a Nicaragua y Cuba.

Todo ello se puso de manifiesto en las conocidas y escandalosas declaraciones del Secretario de Estado, Alexander Haig, que desataron los medios una tempestad de rechazos en el mundo, especialmente dentro de los mismos Estados Unidos, incluso activas y públicas contradicciones entre sus centros de poder.

En la reciente Asamblea de la OEA, el Secretario de Estado Haig descargó todo el peso del imperio presionándola para hacerla retornar a su viejo papel de instrumento legitimador de las intervenciones yanquis en América Latina. Consiguió que se aprobara una resolución que apoya la fórmula electoral sin negociaciones previas, como la supuesta "solución política" para la crisis nacional. Esta resolución, constituye un

paso preparatorio, en el terreno político y jurídico internacional, para la agresión militar contra el pueblo salvadoreño que tiene lista el gobierno yanqui con la cooperación de gobiernos títeres y regímenes fascistas del continente. Voceros de Haig han dicho clara y cínicamente que éste es el significado de la mencionada resolución.

Un pequeño grupo de los gobiernos que en la OEA votaron a favor, apoyan en cuerpo y alma el plan intervencionista norteamericano; su voto por las "elecciones" fue una muestra de descarada hipocresía, puesto que todo el mundo sabe que ellos no realizan ni pueden realizar elecciones democráticas. Tales son, por ejemplo, los gobiernos de Pinochet, las dictaduras militares argentina, uruguaya y guatemalteca, las veteranas dictaduras sanguinarias de Paraguay y Haití.

Otros gobiernos que votaron a favor de la resolución de la OEA, venían pronunciándose reiteradamente a favor de una solución política a la crisis salvadoreña y en contra de la intervención extranjera. Dieron sus votos hasta que consiguieron algunos cambios en el texto de la resolución, que la matizan y le imprimen ambigüedad.

México, Nicaragua y Granada, que votaron contra esa maniobra imperialista y los países que se abstuvieron de votar, son el grupo de gobiernos que prefirieron definirse frente a ella.

La mayoría de la OEA, pues, aunque aceptando un mal procedimiento, que subestima la negociación entre las partes beligerantes, se pronunció a favor de una solución política a la guerra en El Salvador. La práctica demostrará que las elecciones de marzo buscan legitimar la intensificación de la guerra y la intervención militar extranjera y no la paz.

La maniobra en la OEA envalentonó a la Junta y a continuación rompió los compromisos que adquirió con los partidos políticos concurrentes al llamado "diálogo interpartidario", en el sentido de cambiar la Ley Electoral y otras concesiones. El Partido de Duarte quiere aprovechar el apoyo yanqui para acaparar la mayoría en la llamada "Asamblea Constituyente" que surgiría de la farsa electoral de marzo.

La guerra popular revolucionaria del pueblo salvadoreño continúa y continuará

El FMLN rechaza la mascarada electoral de marzo, no reconoce su legitimidad ni la legitimidad de sus resultados, en caso de que se realice. Al mismo tiempo, el FMLN informa a todos los pueblos del mundo que la guerra popular revolucionaria del pueblo salvadoreño que él encabeza, continúa desarrollándose con toda la firmeza, la combatividad, la decisión, el heroísmo y el coraje que lo ha caracterizado. Estamos a favor de una solución política negociada pero jamás aceptaremos que se imponga a nuestra patria la humillación, ni que sea frustrado el derecho de nuestro pueblo a la libertad y la autodeterminación. No aceptaremos jamás que tanta sangre popular se haya derramado en vano.

Si el gobierno guerrerista de Reagan-Haig decide desoir el clamor mundial y aplicar los planes de intensificación de la guerra o de intervención extranjera contra el pueblo salvadoreño, nos encontrará en pie empuñando las armas y disparando, en una resistencia inquebrantable e inclaudicable.

Las Naciones Unidas contra el genocidio, contra la farsa electoral, contra la intervención y a favor de una solución política negociada

El 16 de diciembre, apenas unos cuantos días después de la resolución de la OEA, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 63 votos a favor y sólo 22 en contra (53 abstenciones), aprobó una resolución que expresamente dice que las elecciones de marzo no son una solución política y que ésta clase debe buscarse por medio de la negociación entre las partes. Este es un respaldo claro a la posición del FMLN-FDR planteada ante la misma ONU el 7 de octubre y significa una bofetada en el rostro de la Junta títere y sus arrogantes amos guerreristas de Washington.

El significado político-diplomático de la resolución de la Asamblea de la ONU se puede apreciar por los hechos siguientes: votaron a favor de la resolución todos los países europeos miembros de la OTAN, con la sola excepción de Turquía, incluyendo con su voto a favor y las abstenciones del grupo de países latinoamericanos se suman 11, y lo cual contradice y deja sin piso la mañosa resolución de la OEA.

Dicho en otras palabras, la resolución de la ONU expresa la imagen real del aislamiento de la línea agresiva del gobierno de Reagan hacia El Salvador, Centroamérica y El Caribe, dentro del campo mismo de sus aliados europeo-occidentales, queda en evidencia la fragilidad del apoyo que ha logrado en nuestro continente y el repudio del mundo. De paso, recoge la condena contra Duarte y su Partido Demócrata Cristiano marioneta de los fascistas por parte del mayor Partido Democristiano del mundo, el que gobierna Italia.

Como si esto fuera poco, el Congreso de los Estados Unidos, al mismo tiempo que se pronunciaba la ONU, propinó una importante derrota a su gobierno al aprobar condiciones para la ayuda militar a la Junta sanguinaria, entre las cuales se destaca la de que ésta "debe dar muestras expresas de voluntad política de buscar una salida negociada". Es decir, el Congreso de los Estados Unidos se suma a la abrumadora mayoría de la opinión mundial y de la opinión del propio pueblo norteamericano, en el repudio a la farsa electoral de marzo y en el apoyo a una solución negociada entre las partes beligerantes.

El FMLN está listo para iniciar negociaciones

El FMLN quiere por este medio informar, con toda responsabilidad y seriedad, al pueblo salvadoreño y a todos los pueblos y gobiernos del mundo, que ha preparado sus puntos de vista para hacer viable una negociación que conduzca a una paz justa y democrática y que está en disposición y condiciones para iniciar tal negociación en cualquier momento, como lo desea la comunidad internacional, en aras de poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo y al peligro de agresión militar contra los pueblos de Centroamérica y el Caribe y de evitar el grave riesgo del quebrantamiento de la paz mundial que dicha agresión encierra.

Las semanas y meses próximos dirán claramente al mundo quienes quieren la paz y la democracia y quiénes insisten en el genocidio y la intensificación de la guerra contra el pueblo salvadoreño. En estos momentos se están afinando los planes para el nuevo escalonamiento de la intervención militar, conocemos la fechoría que Washington prepara contra nosotros con ayuda de las dictaduras y otros gobiernos latinoamericanos y le decimos al mundo que no nos asustan, que resistiremos lo que venga.

Al pueblo salvadoreño lo llama el FMLN a preparar sus fuerzas, su entereza y heroísmo inagotables para enfrentar la agresión que pudiera lanzarnos el imperialismo y sus sirvientes. A los combatientes y jefes de nuestras fuerzas armadas revolucionarias la Comandancia General del FMLN los llama a reforzar aún más su moral de lucha y les ordena hacerlo todo para elevar su capacidad y disposición combativa, intensificar su accionar defensivo y ofensivo, fundirse mucho más con el pueblo, nutrirse de su heroísmo y aumentar la eficacia de su cooperación.

El FMLN llama a todos los pueblos de Centroamérica y del mundo a elevar aún más su solidaridad activa con el pueblo salvadoreño.

UNIDOS PARA COMBATIR HASTA LA VICTORIA FINAL

REVOLUCION O MUERTE
VENCEREMOS

ROBERTO ROCA
SALVADOR CAYETANO CARPIO
SCHAFIK JORGE MANDAL
JOAQUIN VILLALOBOS
FERMAN CIENFUEGOS

Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

El Salvador, 20 de diciembre de 1981

Resolución adoptada por el Secretariado Unificado de la IV Internacional, 8 de Enero de 1982



Revolución y contrarrevolución política en Polonia

El 13 de diciembre, la burocracia lanzó la contrarrevolución política en Polonia, declarando una guerra sin cuartel a los trabajadores, para salvaguardar sus privilegios de casta en el poder. Así, ha detenido el ascenso de la revolución política de un poderoso movimiento de masas que avanzaba hacia la instauración de un poder democrático de los trabajadores. El "estado de guerra" es la respuesta a la necesidad imperiosa de atacar a Solidaridad, antes de que se desarrolle un movimiento de huelga activa, de que se aproximen las fechas del referéndum y las elecciones exigidas, y en fin, antes de que se forme una dirección del movimiento capaz de afrontar la cuestión del poder.

Con el "estado de guerra", la burocracia ha liquidado la existencia *abierta* de los órganos de tipo soviético (consejos) creados por los trabajadores. La situación de dualidad de poder abierta en 1980 no podía prolongarse indefinidamente.

1. La burocracia —que podía contar aún con un aparato represivo prácticamente intacto, poco afectado por la contestación antiburocrática— ha elegido la hora y el terreno de la ofensiva. Desde hace meses, todos sus esfuerzos para invertir la situación contaban con el apoyo de Moscú y se basaban en las amenazas y el apoyo material de la burocracia soviética.

Los trabajadores polacos han sufrido una derrota, pero la clase obrera no ha sido aplastada. Es cierto que Solidaridad está gravemente desorganizada por la represión y su dirección ha sido en gran parte decapitada; pese a ello la misma amplitud del sindicato y del "movimiento social" y las experiencias acumuladas, junto con la profundidad del odio popular contra la dictadura del Consejo Militar de Salvación Nacional, han permitido que se manifestase una amplia resistencia bajo formas diversas y se constituyan redes clandestinas. Ha comenzado un largo periodo de conflictos localizados, fragmentados.

El proletariado internacional tiene el deber de apoyar con todas sus fuerzas el combate de las masas trabajadoras y de la nación polaca para hacer fracasar el *diktat* del general Jaruzelski y de Leonid Breznev. En esta solidaridad con Solidaridad, los trabajadores podrán asumir las lecciones de democracia obrera y las experiencias de autogestión conseguidas al calor de las luchas por los trabajadores polacos.

2. Durante el segundo semestre de 1981, todos los factores de movilización de masas tendían a plantear cada vez más claramente, el objetivo de la gestión del conjunto de la sociedad por los trabajadores. Las propias necesidades de la población y la parálisis del sistema de gestión burocrática, demostraban que el proyecto de autogestión "parcial", de reparto de tareas con el poder existente, era irrealista e inviable.

Durante este periodo, de produjeron conflictos abiertos en numerosas ocasiones:

a) "Marchas de hambre" para denunciar el sabotaje de los abastecimientos y la ineptitud de la organización del racionamiento; iniciativas, aún limitadas, de Solidaridad para el control sobre los stocks y la distribución de productos alimenticios.

b) Oposición a la política de precios alimenticios y, en este sentido rechazo abierto por el congreso de Solidaridad de las decisiones sobre alzas de precios adoptadas en octubre.

c) Batalla constante contra las medidas gubernamentales de censura y por el acceso de Solidaridad a los medios de comunicación; en septiembre, huelga de protesta contra la interrupción de la investigación sobre la provocación policiaca de Bydgoszcz.

d) A partir del mes de agosto de 1981, desarrollo del "movimiento por la autogestión" obrera y de los consejos de trabajado-

res; conflicto en torno al nombramiento de directores; modificación de la producción en diversas empresas e iniciativas de coordinación entre las fábricas y el campo (por ejemplo, utilización en el interior del carbón destinado a la exportación).

e) Enfrentamiento en torno a la ley de autogestión y los proyectos de reforma económica; la polarización se agrava en noviembre cuando el gobierno liquida la discusión y el propio proyecto de reforma económica, tomando medidas de centralización extrema; respondiendo a esta escalada del poder y a esta profundización de la crisis económica, se desarrollan en diversas organizaciones regionales de Solidaridad los temas de la "huelga activa" (hacer funcionar las fábricas bajo el control de los trabajadores), la necesidad de establecer un plan de urgencia obrero y de formar guardias obreras.

f) Antagonismo entre Solidaridad y el poder burocrático en torno al problema de las elecciones libres municipales y nacionales, organizadas sobre la base del pluralismo político rompiendo por consiguiente la práctica de las listas únicas del "Frente de Unidad Nacional"; la dirección de Solidaridad lanza un desafío proponiendo un "referéndum nacional dentro del sindicato" sobre "el ejercicio y los métodos del poder".



El movimiento de masas contra la burocracia reivindicaba así la aplicación del artículo I de la Constitución polaca. *"El poder pertenece al pueblo trabajador de la ciudad y el campo"*. Igualmente, la dinámica de las batallas realizadas por los trabajadores tendía a hacerles superar el falso dilema: o bien, gestión hipercentralizada y burocrática de la economía, o bien retorno a una "economía de mercado", aún bautizada de autogestionada, propuesta por varios expertos. La primera solución era combatida abiertamente por los trabajadores desde agosto de 1980. Y a través de la afirmación de su voluntad y de su capacidad de gestión con sus aspiraciones igualitarias, los trabajadores empezaban a percibir las amenazas de la segunda: paro, creciente desigualdad en la sociedad, privilegios para los "técnicos de la gestión" en el marco de la "autonomía financiera" de las empresas. De hecho, los trabajadores buscaban construir un sistema basado en la iniciativa, la gestión y el poder de los productores, y por tanto en un cambio cualitativo de la socialización del conjunto de los medios de producción.

3. a) La instauración del "estado de guerra", la detención masiva de quienes militaban y pensaban libremente, la imposición de una dictadura abierta, demuestran una vez más, que no puede haber "reforma" o "democratización gradual" de un régimen burocrático. En realidad, desde agosto de 1980, las exigencias de su propia supervivencia llevaban al **aparato burocrático** a rechazar la existencia y el desarrollo de un sindicato independiente, de masas, democrático.

Sorprendido por la fuerza repentina y la amplitud del movimiento, obligado por ello a firmar los "acuerdos de Gdansk", el aparato no ha cesado de ponerlos en tela de juicio de rechazar su codificación legal y su aplicación, sin hacer ninguna reforma efectiva, ninguna "renovación", haciendo solamente maniobras. Las concesiones efectuadas se inscriben en el marco de una política de autodefensa inmediata, limitada a los problemas más urgentes, mientras se van reuniendo los elementos necesarios para la contraofensiva.

La burocracia se ha mostrado resuelta a defender su monopolio de poder político, porque esta es la fuente y la garantía de sus enormes privilegios materiales denunciados radicalmente desde el principio por los trabajadores polacos. Además, los Jaruzelski y Olszowski, atacando a las masas obreras polacas, protegen también los intereses del conjunto de la burocracia, a escala internacional. El Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y el POUP declaraban conjuntamente en Varsovia, en abril de 1981: *"Las dos partes destacan la importancia excepcional de la concentración de*

todas las fuerzas patrióticas del pueblo, para prevenir las amenazas que se ciernen sobre las conquistas del socialismo en Polonia, para responder a los intentos de los grupos de oposición de establecer un doble poder en el país. El PCUS se solidariza con los esfuerzos del POUP en defensa del socialismo y para estabilizar la situación social y económica".

El cinismo de los pretextos invocados y la violencia de las acusaciones lanzadas contra Solidaridad, calificada de "antisocialista" y "contrarrevolucionaria", están a la altura de los privilegios que el poder burocrático quiere proteger. Evidentemente, ni siquiera se ha intentado suministrar la prueba de que los diez millones de trabajadores organizados en Solidaridad querían reintroducir la propiedad privada de los medios de producción y del sobreproducto social. En múltiples ocasiones, Solidaridad se ha pronunciado por la propiedad colectiva, la socialización de los medios de producción. Y por otra parte, más de un millón de miembros del POUP se habían afiliado a Solidaridad, el sindicato que organizaba a la inmensa mayoría de los trabajadores manuales e intelectuales. Por el contrario, los generales y varios **aparatchiks** no se han privado de acusar a la clase obrera de querer "adueñarse del poder". Esta acusación constituye, en sí misma, una denuncia de la usurpación burocrática del poder.

Por otra parte, los centenares de miles de policías y soldados de la segunda potencia militar del Pacto de Varsovia no están combatiendo hoy contra "agentes del capitalismo" o "el imperialismo": están encarcelando y amordazando a millares de representantes de los trabajadores. El desprecio del poder burocrático por los intereses colectivos de la clase obrera, es equivalente a la actitud con que ha conducido al país al desastre económico. Cuando la burocracia afirma que la "ley marcial" se ha impuesto para salvar a la economía de una catástrofe, está exhibiendo nuevamente sus crímenes. En efecto, en un país en el que ha desaparecido la propiedad privada de los medios de producción esenciales, la lucha contra una crisis económica de estas dimensiones pasa necesariamente por desplegar la iniciativa de los trabajadores y el campesinado. Por el contrario, el Consejo Militar de Salvación Nacional ha declarado la guerra a esos trabajadores. Ha demostrado así que sólo es realmente el "Consejo Militar de Salvación de la burocracia".

b) La burocracia disponía de una base social reducida, que se iba desmoronando cada vez más, pero tenía una clara conciencia de lo que estaba en juego en la batalla, de la inevitabilidad de un enfrentamiento, y se preparaba a realizarlo. Por el contrario, Solidaridad, que concentraa a las fuerzas vivas de la nación, y cuya actividad conducía al enfrentamiento radical con el poder burocrático, sólo ha comprendido parcial y tardíamente este problema. Ciertamente se iba desarrollando un proceso de toma de conciencia sobre la imperiosa necesidad de prepararse para un combate central y presentar la propia candidatura al poder. Pero este proceso avanzaba de una manera muy desigual y sin producir aún una corriente organizada nacionalmente; los avances más significativos en este sentido tenían lugar a escala regional.

Pero un conjunto de corrientes activas, que disponían de una audiencia importante en los organismos de dirección —gracias sobre todo a los expertos— desarrollaba una estrategia de **autolimitación** del movimiento. Según ellos, esta estrategia debía permitir aplazar los problemas hasta el momento en que la impotencia del poder central permitiera la aplicación de una solución propuesta, de hecho, por Solidaridad. Ninguno de estos sectores de la direccion, aún con todas las diferenciaciones existentes entre ellos, preparaba a los trabajadores para hacer frente a la capacidad de acción que poseía un poder que, pese a su aparente parílisis, contaba con una fuerza de intervención centralizada y una infraestructura (telecomunicaciones, medios de comunicación de masas, transportes, etc.) que cubrían el conjunto del país.

Durante todos estos acontecimientos, la jerarquía católica, influyente en la dirección de Solidaridad, no ha dejado de jugar un papel de mediación entre las fuerzas presentes, apoyando las posiciones favorables a la autolimitación. Por medio de diversos compromisos, trataba de estabilizar la inestabilidad. La influencia y el peso político creciente, obtenido de este papel de mediador, eran utilizados para obtener nuevas concesiones del poder, como por ejemplo, la creación de un partido demócrata-cristiano. Por el contrario, la Jerarquía eclesiástica comprendía como un desafío histórico que el resultado victorioso de una lucha en la cual Solidaridad hubiera sido el instrumento de una conquista efectiva de la soberanía del pueblo polaco en los terrenos político, social y económico, habría reducido duramente su papel en la sociedad.

4. Durante 18 meses, en el crisol de este gigantesco movimiento, una amplia dirección se fue forjando en Solidaridad. Su evolución ha sido positiva en diversos terrenos. En muchas ocasiones, supo comprender el empuje de los trabajadores. Mantuvo la unidad del conjunto del movimiento frente a las trampas colocadas por el POUP. Reaccionó firmemente contra las medidas represivas del régimen. Rechazó toda práctica de colaboración con la burocracia, al margen de algunas indecisiones y compromisos muy parciales. Se mostró capaz de organizar discusiones democráticas de una excepcional amplitud. Un gran número de sus miembros han experimentado una rápida progresión en su capacidad para responder a los problemas sociales y económicos. Pero en todo caso, se mantenían una serie de debilidades y carencias.

Así, en marzo de 1981, frente a la provocación de Bydgoszcz, la dirección de Solidaridad manifestó su capacidad y su voluntad de preparar la huelga general, para defenderse de los ataques de la burocracia. Pero finalmente, desconvocó la acción, no utilizando el enorme potencial de fuerza que representaban sus millones de miembros activos. Las masas sufrieron así una experiencia fallida.

A partir de ello, se sucedieron las oscilaciones y las dudas en la dirección. Más de una vez los principales portavoces del sindicato se vieron obligados a cabalgar huelgas de sectores combativos, pero cuyas reivindicaciones y acción no se afirmaban como una respuesta a la desorganización de la vida económica y a sus consecuencias para la población. En otras ocasiones propusieron terminar las luchas. En los dos casos, el sindicato y su dirección se arriesgaban a perder credibilidad y autoridad frente a los trabajadores en lucha y a los sectores de la población que esperaban una respuesta a sus problemas. La burocracia procuraba aprovecharse de esta situación.

Desde el verano, sectores muy minoritarios de Solidaridad propusieron la "huelga activa" y fortalecer la coordinación de los consejos de trabajadores. De este modo, la lucha habría adquirido una legitimidad aún mayor y se habría situado en un terreno más difícil para la represión burocrática enraizándose en la voluntad de resolución de las dificultades sociales y económicas. Un nuevo progreso en la autoorganización habría surgido de las propias presiones del combate contra el sabotaje y la ineficacia burocrática.

La "huelga activa" se concebía como un instrumento que, en una primera etapa, debía dar el poder "económico" a los trabajadores. Pero limitarse a esto, no permitía prepararse para los enfrentamientos que se avecinaban. Para ello, esta orientación debía completarse con una respuesta política de conjunto, que habría permitido centralizar los órganos de autogestión (2ª Cámara de Autogestión), preparar una solución alternativa en el terreno gubernamental y, en este marco abordar las tareas de autodefensa y la preparación para el enfrentamiento.

El 1er. Congreso nacional de Solidaridad reflejó el contraste entre la amplitud del movimiento, su autoridad, y la legitimidad de su alternativa por un lado y la debilidad de las propuestas de acción capaces de coordinar las energías proletarias, por otros.

Desde los primeros días de noviembre de 1981 se aceleraron los procesos de diferenciación en las filas de Solidaridad. Las tendencias favorables a las iniciativas de coordinación regional de los consejos de trabajadores y a la "huelga activa" se reforzaron



frentamiento que se deducía del combate de los trabajadores, como la verdadera naturaleza del enemigo burocrático. Su existencia habría limitado grandemente los efectos de desorientación y de sorpresa provocados por todas las maniobras de distracción —como las propuestas de "concordia nacional" administrada por el POUP, la Iglesia y Solidaridad— y la sorpresa provocada por un contraataque frontal.

Este contrapoder centralizado habría representado el marco necesario para una solución del enfrentamiento favorable a los trabajadores. Para ello, habría sido necesario que se afirmara en los órganos de autoorganización una fuerza revolucionaria capaz de impulsar las iniciativas políticas y prácticas para neutralizar una intervención represiva de la burocracia y permitir el ejercicio real del poder por la clase obrera.

especialmente dentro de las direcciones sindicales de algunas grandes regiones y entre los trabajadores de las principales empresas. Se propuso la creación de "guardias obreras". La cuestión del poder apareció tan inmediatamente a la orden del día, que casi todos los miembros de la KK (Comisión Nacional de Solidaridad) debieron reconocerlo y discutirlo sin ambigüedades, en Radom y Gdansk al principio de diciembre, aunque constatando, la mayoría de ellos, que no estaban preparados para hacerle frente. En cualquier caso, continuaron pensando que la burocracia no disponía a muy corto plazo, de la posibilidad de tomar la iniciativa.

Sin embargo, tanto Jaruzelski, como el Kremlin eran perfectamente conscientes de que, aunque las masas no disponían aún de instrumentos adecuados para centralizar todos sus esfuerzos, se estaba produciendo una maduración política que favorecías su conquista. Por ello, la dirección de la burocracia decidió intervenir rápida y brutalmente. La centralización del poder y de la voluntad burocrática, permitieron a la casta parasitaria, a pesar de encontrarse seriamente quebrantada, imponer **su iniciativa** a un movimiento de millones de trabajadores, intelectuales, jóvenes, que no estaba preparado para oponerle, en todo los terrenos, su propio contrapoder centralizado.

La disposición de las masas y la dinámica de su combate hacía objetivamente posible otra alternativa. El origen de esta ausencia de contrapoder centralizado no está en una debilidad intrínseca de las masas o de su voluntad de lucha. Está en la falta de un partido político organizado y consciente, o al menos de una tendencia revolucionaria con influencia nacional capaz de comprender tanto la lógica objetiva de en-

5. a) Con la instauración del estado de guerra y del Consejo Militar de Salvación Nacional, la burocracia ha modificado sus formas tradicionales de dominación, revelando así la extrema debilidad de su base social y la crisis acentuada de las instituciones en que se funda su hegemonía política (POUP, Frente de Unidad Nacional, Dieta, etc).

El POUP es uno de los "partidos comunistas" en el poder que ha sufrido choques más repetidos. Después de las experiencias de Gomulka y de Gierek, era muy difícil jugar la carta de la "renovación" del partido y del "hombre providencial". La breve carrera de Kania ilustra la precariedad de las soluciones de recambio que se buscaron en esta dirección.

Bajo el choque del despertar de las masas, el partido, minado por la corrupción, se desagregó. Ha habido que excluir a millares de miembros del aparato. Sgún cifras oficiales, que subestiman la realidad, 400.000 militantes han devuelto su carnet. (El Partido tenía 3 millones de miembros, entre ellos un 45% de obreros, concentrados sobre todo en las 170 grandes fábricas, que constituyen los bastiones de Solidaridad).

Numerosas secciones del POUP en las grandes fábricas se disolvieron o fueron disueltas, porque los trabajadores se negaron a seguir financiándolas con el presupuesto de la empresa. El congreso llamado de la "renovación" del POUP, fracasó. Las iniciativas de las fracciones que rechazaban **abiertamente** todo compromiso, como el "Forum de Katowice", encontraron grandes dificultades para aumentar su influencia. A pesar de disponer de los recursos del aparato de Estado y de la ayuda del Kremlin, el POUP aparecía desorientado e incluso paralizado. Pero se aferraba desesperadamente al poder y no estaba dispuesto a soltar sus riendas. Millares de militantes de Solidaridad subestimaron la



capacidad de reacción de esta bestia herida.

Además del gran debilitamiento del POUP, se produjo una pérdida relativa de su control sobre la Dieta. Como ocurrió en Checoslovaquia durante la primavera de Praga, apareció un proceso inicial de autonomización del parlamento. Cuando se producen estos seísmos sociales, los partidos tradicionalmente serviles al poder toman algunas distancias. Así, el 3 de octubre, la Dieta se negó a adoptar las medidas de urgencia propuestas por Jaruzelski, nombrado ya primer ministro, lanzando a la vez una severa advertencia a Solidaridad, para que pusiera fin a las huelgas.

b) Esta doble crisis institucional fiable para acciones planificadas y centralizadas de contraofensiva de la casta burocrática, capaz de actuar en este terreno en estrecha relación con las fuerzas armadas de la URSS.

Desde 1980, el Pacto de Varsovia, bajo la dirección de los mariscales soviéticos, multiplicó las maniobras militares y las "operaciones combinadas". En el marco mismo de estas operaciones militares, se preparaba la organización de un sistema paralelo de telecomunicaciones, que debía permitir el aislamiento de Polonia y la interrupción de todas las comunicaciones interiores. En el otoño de 1981 se realizaron varios encuentros al más alto nivel, entre militares polacos miembros del gobierno y los dirigentes políticos y militares del Kremlin.

El acceso del Ministro de Defensa y Primer Ministro Jaruzelski a la cabeza del POUP, el 18 de octubre, reflejaba este deslizamiento hacia una dominación burocrática apoyada abierta y directamente en el aparato de represión policíaco-militar, y anunciaba la preparación de un contrataque de envergadura. Pero el sentido real de este nombramiento no fue comprendido por la dirección de Solidaridad. Incluso algunos de sus miembros pensaban que "la situación sería mejor que antes" (Walesa), ya que existía un interlocutor y, por ello, se alejaba la amenaza de una intervención militar soviética directa.

El 19 de octubre, una reunión del Consejo Militar del Ministerio de la Defensa precisaba las tareas de las fuerzas armadas polacas a partir de la resolución del POUP del 18 de octubre". Ya en el mes de septiembre se había empezado a realizar un plan de presencia de los soldados en las minas para "ayudar a la producción". El 18 de octubre, se decidió también la prolongación por dos meses de servicio militar para el contingente. Los generales, miembros del POUP, no veían con buenos ojos la llegada a los cuarteles de jóvenes reclutas que habían vivido directamente toda la experiencia de lucha de los últimos meses. A partir de este momento, las medidas adoptadas fueron en aumento. El 23 de octubre, Jerzy Urban, portavoz del gobierno, anunció el envío por todo el país de 883 unidades militares, de 3 a 4 personas, todas mandadas por un oficial, para "resolver los conflictos locales" y "tomar medidas contra los fallos de la administración local".

En realidad, este despliegue del ejército, que se prolongará durante algunas semanas, tenía como objetivo facilitar la preparación de la toma del control directo del aparato administrativo y la organización de un plan represivo ajustado y eficaz.

En fin, el 2 de diciembre, se produjo el ataque de la **milicia** a la Academia de Bomberos, que había sido ocupada con el apoyo de Solidaridad. Este movimiento reflejaba directamente el impacto de Solidaridad en un sector de las fuerzas militarizadas. Jaruzelski y sus colaboradores estaban obligados a reaccionar. Rompiendo por la fuerza la ocupación realizaron un test sobre la determinación de Solidaridad, en un terreno no ligado directamente a la clase obrera, pero cuya naturaleza le convertía en un foco sensible para el poder. La dirección de Solidaridad dudó en lanzar inmediatamente una respuesta general, del tipo de la que había preparado en marzo de 1981. El poder se aprovechó de ello y relanzó duros ataques contra el "golpe de Estado" y "la liquidación de los comunistas", pretendidamente separados por Solidaridad. La dirección burocrática, cualquiera que fueran sus debilidades, había comprendido que podía arriesgarse a provocar la prueba de fuerzas en el terreno y en el momento que juzgara más favorables. En la medianoche del 12 de diciembre, cuando los trabajadores estaban fuera de sus fábricas, el POUP y sus generales les impuso brutalmente el silencio.

c) Para asegurar su supervivencia, el aparato burocrático ha reorganizado su monopillo del poder apoyándose, con toda claridad, en las fuerzas paramilitares y las tropas especializadas del ejército, sostenidas por el contingente. Esto no significa la aparición en la escena política de un tercer actor, independiente de la burocracia y el POUP: el ejército. El cuerpo de los oficiales superiores representa el núcleo duro del partido. Todos los generales y coroneles son miembros del partido y la inmensa mayoría está diplomada en las academias militares de la URSS. Jaruzelski es el primer secretario del POUP, investido por la Constitución polaca del papel dirigente de la sociedad. Siwicki, jefe del Estado Mayor y viceministro de Defensa, fue nombrado el 28 de octubre candidato al Buró Político; Milewski encargado hoy de la seguridad interior, es también miembro del Buró Político. Kiszczack, patrón de la "segunda compañía" del Ejército polaco, está al frente de las "fuerzas operativas" de seguridad y es un colaborador de Jaruzelski en la dirección del POUP. Por otra parte, desde la primavera de 1981, se ha ampliado el papel de los militares entre los cuadros del POUP.

Esta interpenetración entre la dirección del POUP y la del ejército descarta la idea de la emergencia de una "tercera fuerza". En todo caso, el cambio que se ha producido en el sistema de dominación de la burocracia, traduce la profundísima pérdida de legitimidad del POUP y la ruptura extrema entre la casta burocrática y las fuerzas vivas de la nación. Esta es la expresión de una nueva etapa en la crisis de la dictadura burocrática.

Es claro que para la URSS, la instauración del "estado de guerra" por la milicia y el ejército nacional polaco constituye la solución menos costosa, en todos los terrenos, para intentar obtener la "normalización". Es cierto que la autonomía de las fuerzas militares polacas es sólo aparente, pero esta apariencia tiene efectos importantes en la política nacional e internacional.

6. El objetivo inmediato del Consejo Militar de Salvación Nacional era romper Solidaridad como aparato organizado nacionalmente —un aparato, por otra parte, poco preparado políticamente y, por consiguiente, organizativamente, para este tipo de choque— e intimidar a un sector suficientemente amplio de la población, para persuadirle de la inutilidad de la resistencia. Además se propagó la idea de que el golpe de fuerza era la última posibilidad de evitar una intervención soviética directa.

En el seno mismo de Solidaridad, existía la ilusión de que el ejército **polaco** sólo podía pegar golpes sobre la mesa, sin producir ningún cambio importante en la situación. Pero todas las medidas decretadas desde la medianoche del 12 de diciembre prueban lo contrario: redada masiva de los dirigentes y militantes de Solidaridad, la mayor parte de ellos detenidos en sus domicilios; también son arrestados intelectuales y estudiantes; a la "suspensión" o disolución de Solidaridad se añade la de Solidaridad Rural, organizaciones de estudiantes, la Asociación de Periodistas, e incluso la Unión polaca de cazadores; también son suspendidas las tres organizaciones católicas existentes; los locales de Solidaridad y de otras organizaciones son saqueados; las telecomunicaciones urbanas, interurbanas e internacionales son interrumpidas; los únicos periódicos autorizados son Trybuna Ludu (órgano del partido) y Zolnierz Wolnosci (órgano del ejército); la radio y la televisión son controladas por las fuerzas de policía; se prohíben los desplazamientos fuera del lugar de residencia y la venta de gasolina; los sectores clave de la economía son militarizados y los que trabajan en ellos están sometidos a la ley marcial.

La burocracia aprovecha el factor sorpresa y utiliza directamente sólo a las fuerzas de represión paramilitares, integradas íntimamente en los mecanismos de distribución de privilegios del régimen burocrático. Estas tropas, desde la milicia a la policía de fronteras, forman un cuerpo de 150.000 funcionarios civiles y de uniforme.

Junto a este instrumento represivo directo, la burocracia utiliza los recursos que provienen de su control sobre los suministros de primera necesidad (alimentación y ropas). Se instaura el trabajo obligatorio, de modo que todos los que no disponen de un empleo "normal" deben presentarse ante la administración y tomar el puesto que se les asigne; este es un instrumento para descubrir a los permanentes (40.000) de Solidaridad.

Bajo la cobertura de la "autonomía financiera" de las empresas, la burocracia ha introducido una relación entre los resultados productivos y los salarios, con el fin de desgastar la resistencia pasiva y dividir a los obreros. Los directores de las empresas, con ayuda de comisarios militares, organizan la distribución de permisos de circulación, despiden masivamente y sólo firman nuevos contratos a trabajadores seleccionados. En la administración y las empresas, los asalariados deben firmar declaraciones de lealtad para conservar, o volver a encontrar un empleo. En la mejor tradición estalinista, se realizan procesos en los cuales las acusaciones no deben ser probadas y las sentencias no pueden ser recurridas.

b) Teniendo en cuenta el grado aún limitado de centralización de la autoorganización y la falta de claridad política de los organismos dirigentes de Solidaridad, era impensable que se produjera una respuesta rápida y coordinada ante esta avalancha de medidas. En realidad, estas debilidades han alentado el golpe de fuerza.

Sin embargo, la reacción espontánea de los trabajadores polacos, calificando como **una ocupación**, la toma del control del país por las fuerzas armadas polacas, refleja **el fracaso político** del intento de justificar el golpe de fuerza con pretextos "nacionalistas".

El extraordinario empuje del movimiento de masas y el rechazo visceral de la restauración del orden burocrático, desembocaron en una proliferación semiespontánea de huelgas y en una resistencia muy amplia: más de 15 días de huelga y ocupación en las minas de Silesia (bastión de Solidaridad, con 1,5 millones de miembros); huelgas, ocupaciones y enfrentamientos en centenares de empresas y en las ciudades más importantes: Varsovia, Katowice, Gdansk, Lublin, Wroclaw, Lodz, Radom, Poznan, Elblag, Gdynia, Torun, etc; los comités de las empresas piloto (Ursus, Huta Varsovia, Astilleros Warski en Szczecin) lanzaron llamamientos a la huelga general al igual que 5 miembros de la Comisión Nacional (KK) d Solidaridad, el 14 de diciembre.

Este llamamiento declaraba: *"De acuerdo con las resoluciones adoptadas por la KK el 4 de diciembre en Radom y el 12 de diciembre en Gdansk (...), respondemos a la violencia con la huelga general (...). Ningún sindicato, ninguna organización pueden permitir sin reaccionar que sus dirigentes sean víctimas de la represión, privados de sus derechos, ni que se limiten las libertades de los ciudadanos (...). Al emprender esta huelga, recordamos la necesidad de mostrar disciplina y tranquilidad, de respetar la propiedad del Estado y de evitar dentro de lo posible el enfrentamiento innecesario con las fuerzas de seguridad".*

Tanto los estudiantes como los intelectuales que se negaban a comprometerse con el régimen, manifestaron también su oposición (manifestación con desafío de la milicia, distribución de panfletos para conmemorar la lucha de 1970). Para neutralizar algunos bastiones más sólidos de la resistencia, el Comité Militar de Salvación Nacional no vaciló en cerrar hasta el 4 de enero los Astilleros Warski en Szczecin y los Astilleros de Gdansk.

Tras una primera etapa de resistencia más activa, se pasó a la resistencia pasiva. Los trabajadores tratan de utilizar a fondo su posición determinante en el aparato de producción para dar jaque al proyecto de normalización aplicado a punta de bayoneta por la burocracia. Intentan poner en punto muerto una parte de la maquinaria económica que quisieran relanzar los comisarios militares. Tratan de aislar a los que colaboran con el régimen y de demostrar que este aparato productivo, que formalmente es "propiedad del pueblo", no puede funcionar en absoluto de modo satisfactorio en contra de la voluntad expresa de los trabajadores.

En la misma resistencia, Solidaridad utiliza sus tradiciones organizativas y de lucha en las empresas, al igual que las mil astucias de oposición pasiva que han experimentado los trabajadores durante años (aplicación escrupulosa de los reglamentos, sobre todo cuando son absurdos, respeto absoluto de las limitaciones impuestas a cualquier iniciativa obrera). Esta negativa a participar se convierte en un factor de desorden latente que socava profundamente la imagen de un poder que pretende establecer el orden. Esta oposición puede permitir llevar a cabo múltiples acciones favorables a la creación de redes clandestinas que se alimentan gracias al total descrédito de la casta burocrática, al arraigo social que conserva y a los espacios "libres" creados en las fábricas y en las iglesias.

"El espíritu de Solidaridad" —en palabras de los llamamientos clandestinos del Sindicato— ya se ha manifestado en la organización del apoyo a los presos y a sus familias, lo que constituye una oposición



abierta a la dictadura burocrático-militar. También pueden configurarse acciones directas contra la milicia, aunque limitadas, máxime cuando se vean motivadas por el espíritu de la "lucha contra el invasor".

Este tipo de resistencia pasiva, a escala tan amplia, no puede perdurar más allá de cierto tiempo. Los imperativos de la vida social y económica cotidiana, las grietas que provocan en el muro firme de la hostilidad al régimen, reducen a la larga su intensidad y su alcance. Sin embargo, no hay que excluir totalmente que esta resistencia se combine con algunas explosiones de masas, fragmentadas, contra las medidas sociales y económicas brutales que se añadirán a la ley marcial. Pero cualquier movilización amplia y abierta contra el régimen exigirá un mínimo de perspectiva global.

Independientemente de cuáles sean los diversos epidosios de la resistencia, no cabe duda que la misma amplitud del movimiento de los trabajadores organizados en Solidaridad implica que no pueda ser liquidado totalmente. Toda una generación de jóvenes trabajadores, estudiantes e intelectuales acaba de realizar una experiencia relativamente larga de organización y de lucha. Además, los cuatro años de preparación de esta lucha —que se resumen básicamente en la historia del Comité de Autodefensa social, KOR, y de las redes obreras vinculadas al boletín Robotnik (el Obrero)— han adquirido un enorme prestigio al calor del propio surgimiento de Solid_ridad.

Así, más allá de la desmoralización que puede afectar a numerosos militantes, no cabe ninguna duda que surgirá una acción subterránea de resistencia y reorganización, que se confirmará cierta continuidad. En el transcurso de las nuevas fases de combate contra la dictadura burocrática, se seleccionarán nuevos cuadros. Se producirá una clarificación política. Allí reside una diferencia importante con lo que ocurrió en Hungría después de 1956 y en Checoslovaquia después de 1968. Máxime cuando el nivel de crisis económica alcanzado por el conjunto de los regímenes burocráticos no tiene ningún precedente y no puede compararse con los años 1960 y 1970.

7. Al cabo de más de tres semanas de ley marcial, el control absoluto sobre los medios de comunicación, de utilización de todos los recursos del aparato de Estado, el Comité Militar de Salvación Nacional no ha logrado obtener la aprobación de los dirigentes de Solidaridad. Se ve obligado a silenciar el nombre de algunos dirigentes subalternos con los que afirma estar negociando. No ha obtenido ningún resultado a pesar de todas las presiones ejercidas sobre Lech Walesa, encarcelado para "discutir" sobre el porvenir del movimiento sindical independiente y autogestionado "en el marco de los principios constitucionales". Ningún sector intelectual ha aceptado aún apoyar el papel de "salvador de la Nación" que se arroga la dictadura. Esta ni siquiera ha intentado organizar manifestaciones de apoyo, costumbre que sin embargo siempre ha sido muy cara a los stalinistas.

En cambio, a los revanchistas de todo pelaje no se les ha ocurrido nada mejor, para tratar de hacer vibrar la cuerda nacionalista, que lanzar una nueva y amplia campaña antisemita. Es cierto que sus directores de orquesta se encuentran en la cúspide del régimen, como los Olszowski y los Gornicki, portavoces y consejeros del general Jaruzelski. Todo muestra así el aislamiento sin precedentes en que se encuentra el régimen, la fosa que separa a los que "salvan la nación" y la nación misma.

Salta a la vista que el régimen se encuentra en un callejón sin salida, pero ha logrado preservar lo esencial: mantener el poder, fundamento de los privilegios de la burocracia. En la próxima fase, esta se esforzará en tratar de salir de este callejón, manteniendo al mismo tiempo el control policial más riguroso sobre el país.

En esta tarea cuenta con la ayuda que le puede prestar la jerarquía católica. Espera también que sus acreedores imperialistas ofrezcan una actitud comprensiva, dado que se "ha restablecido el orden". El Consejo militar de salvación nacional se explaya en declaraciones sobre su voluntad de "no poner en tela de juicio los principios fundamentales del proceso de democratización". Esto sirve para confortar la moderación del Vaticano y de sus acólitos polacos, y para facilitarle políticamente la tarea al canciller alemán Helmut Schmidt.

En las nuevas condiciones creadas con el estado de guerra, el Consejo militar de salvación nacional intenta una vez más dividir a los trabajadores, llegar a un acuerdo de fachada y relanzar un sindicato "independiente"... de la experiencia de Solidaridad. En virtud de las mismas necesidades del funcionamiento del sistema socioeconómico imperante en Polonia, tratará de crear las condiciones de una hegemonía política que no se apoye directa y abiertamente en la fuerza de las bayonetas. Además, a medio plazo, los dirigentes del Kremlin no pueden acomodarse a una situación en la que el segundo ejército del Pacto de Varsovia se vea absorvido por tareas más directamente políticas, y cuyos efectos de desmoralización serían inevitables y limitarían por ello su capacidad operativa en el marco de este pacto.

Pero un cambio de los actuales mecanismos de dominación y una reorganización del escenario político exigirían una serie de condiciones previas, bastante difíciles de reunir:

• Una estabilización efectiva del Partido, ya sea con el nombre del POUP u otro, y un mínimo de credibilidad para esta formación. La proclamación del estado de guerra y la represión contra los trabajadores ha comportado una nueva hemorragia de sus militantes obreros. La batalla lanzada por los revanchistas de los antiguos "forums" no sólo se planteó contra los militantes de Solidaridad, sino también contra todos los miembros del POUP que se habían mostrado débiles o habían colaborado con el sindicato independiente. La purga prosigue a todo tren. La reconstrucción del Partido puede resultar una tarea penosa. Sin embargo, hay un esfuerzo sistemático por reactivar las estructuras del Partido, por hacer que este reaparezca y por equilibrar la distribución de los papeles de dirigentes públicos entre los generales y los Rakowski, Kubiak, Barcikowski y Olszowski. El martes 16 de diciembre, Olszowski declaró ya públicamente que el Partido *"apoyaba estas medidas enérgicas, indispensables para salvar al régimen socialista».*

Ciertos miembros del POUP participan en los "comités de ciudadanos para la salva ción", organismos que cooperan con la policía. De hecho, la única perspectiva del Partido parece ser la de encarnar el orden establecido. De este modo volverá a obtener su legalidad, pero no su legitimidad.

• Cualquier proyecto de recomposición política, por poco viable que sea, exigiría una situación económica mucho mejor que la actual. Además, en este terreno el golpe militar debía permitir precisamente imponer un amplio plan de austeridad, con el paro, el aumento de precios, las limitaciones de los gastos sociales, el incremento de la disciplina laboral que le acompañan. Los primeros decretos del Consejo Militar de Salvación Nacional anunciaban ya esta orientación. La situación económica por sí misma alimenta un descontento permanen-



te. En este contexto, un sindicato "independiente" estrechamente vigilado, que cogestiona los proyectos del régimen, no encontraría ningún eco entre el grueso de los trabajadores.

No cabe duda que la otra faceta de esta reforma económica, además de la austeridad para las masas, consistirá en reservar a los directores y al personal de encuadramiento la mayor parte de las primas previstas. De esta manera, los actuales dirigentes podrían atraerse una base social y presentarse como partidarios de una "renovación" económica. Pero una vez más, esta perspectiva sólo tiene alguna posibilidad de éxito en la medida en que disminuya mucho la resistencia o se profundice la desmoralización. Sólo entonces podría suspenderse el control social policial y la supercentralización del régimen actual, elementos que son contradictorios con la lógica interna de una política económica al estilo de Janos Kadar, que por lo demás tampoco se inició inmediatamente después de 1956 en Hungría.

Finalmente, si se prolongan las dificultades actuales de abastecimiento y la negativa de los campesinos a entregar los productos agrícolas y ganaderos almacenados, será necesario requisar dichos productos. De este modo se ampliará aún más el abismo entre los campesinos y el régimen. Entonces se evaporarán las esperanzas de atraerse a un sector del campesinado por medio de algunas concesiones (precio de compra de los productos, suministros privilegiados de abono, etc.).

• La jerarquía de la Iglesia sigue siendo una de las principales bazas que debe asegurarse el general Jaruzelski. Ya se ha felicitado por su papel moderador. El golpe militar colocó a los dirigentes de la Iglesia en una situación delicada. Desde 1956 habían obtenido toda una serie de ventajas y privilegios (dinero, infraestructura, imprentas, prensa, organizaciones propias, mayores posibilidades de educar a la juventud e influenciar a la población). Para el Vaticano, la Iglesia polaca representaba un bastión y una cabeza de puente en los "países del Este". Tanto en Roma como en Varsovia se teme que una resistencia más activa de los obreros desemboque en choques violentos y que todas estas concesiones queden anuladas al inmiscuirse los soviéticos aún más en los asuntos polacos.

Esta es la base material que impulsa a Monseñor Glemp, el primado de Polonia, a buscar constantemente una solución de compromiso. Pero este compromiso no está al alcance de la mano, no sólo porque el poder no tiene gran cosa que ofrecer, sino porque comporta el riesgo de ruptura con los trabajadores en que influye la Iglesia. Las tensiones en el propio seno de la Iglesia lo ponen de manifiesto, máxime cuando hoy las iglesias son utilizadas como lugares de organización de la resistencia.

Por tanto, no cabe duda que era más fácil proclamar el estado de guerra que conducirlo hasta la normalización. Nunca ha tenido una burocracia que organizar su sistema de poder a todos los niveles y a una escala tan amplia, desde las empresas hasta el gobierno, pasando por las regiones.

8. a) La proclamación del estado de guerra es un golpe muy duro para el movimiento obrero internacional en su conjunto. El combate de millones de trabajadores de Solidaridad era, a partir de agosto de 1980, una de las puntas de lanza más avanzadas del proletariado en todo el mundo. Constituye una experiencia sin precedentes en la historia de la lucha contra la dictadura burocrática y por la socialización efectiva de los medios de producción y de la riqueza social.

El desatre económico y social que conoció Polonia antes del ascenso de las movilizaciones obreras demostraba ya hasta qué punto la casta burocrática mina los cimientos de la construcción de una sociedad socialista. La burocracia ha agravado todas las desproporciones básicas de la economía: las que existen entre la industria y los recursos energéticos, entre la industria y la agricultura, entre la producción material y los servicios sociales. Ha profundizado la dependencia con respecto a la economía capitalista internacional, provocando un enorme endeudamiento. Ha dado alas al desorden, al despilfarro, a la corrupción, a la irresponsabilidad generalizada y a la desigualdad social.

En la industria han aparecido auténticos "feudos" controlados por determinadas camarillas burocráticas, lo que no podía sino perjudicar a la planificación. Todo ello desembocó en una crisis de gran escala, que se hizo patente a partir de 1979. Al suprimir todos los derechos democráticos conquistados por las masas polacas, al prohibir los sindicatos y las hurlgas el general Jaruzelski y Leonid Breshnev han puesto de manifiesto, una vez más, su voluntad de bloquear cualquier avance hacia el socialismo.

En este combate entre un gobierno burocrático y las masas, nosotros hemos estado y seguimos estando totalmente del lado de las masas. El Estado obrero no era objeto de ningún asalto imperialista para restaurar el capitalismo. Ninguna fuerza social quería reintroducir la apropiación privada del sobreproducto social, y por mucho que lo hubiera querido, no podría haber materializado tal proyecto frente a millones de obreros que querían dirigir las fábricas por su propia cuenta.

Quien sí era atacada, en cambio, era la burocracia y su dictadura que había usurpado el poder en el Estado obrero. El proletariado estaba poniendo en tela de juicio el poder de una minoría privilegiada, defendida por todo el aparato represivo. La eliminación de la casta burocrática sólo podía reforzar, y no debilitar, la propiedad colectiva, reforzar y no debilitar a la clase obrera a escala internacional. La liquidación del poder burocrático habría demostrado en la práctica, a los ojos de las masas del mundo entero, que la economía y la sociedad pueden ser dirigidas por el conjunto de los trabajadores, y no por una minoría burocrática autoritaria y arbitraria. De este modo se habría dado un paso gigantesco hacia la socialización sustancial de la economía, hacia el socialismo.

Esto es lo que explica, en sustancia, la Santa Alianza que alcanza desde el Kremlin hasta Wall Street. Los trabajadores polacos perturbaban la coexistencia en calma, y por tanto había que poner fin a sus desmesuradas pretensiones.



El **Kremlin** puede estar contento de ver cómo se aplican con prontitud sus "consejos", sin verse obligado además a participar directa y masivamente en la represión. El precio de esta participación habría sido muy alto, tanto política como materialmente. Con su intento de aniquilar a Solidaridad, el general Jaruzelski y los suyos no sólo defienden sus propios intereses, sino que defienden los de todos los regímenes burocráticos.

La reaccióndе la prensa soviética al "Llamamiento a los trabajadores del Este" fue todo un botón de muestra: *"En el Congreso de Solidaridad, en Gdansk, las fuerzas antisocialistas, inspiradas por los servicios secretos norteamericanos, anunciaron una cruzada contra el socialismo en Polonia y en el conjunto de la comunidad socialista al aprobar el famoso "Llamamiento a los pueblos de Europa del Este"* (*Pravda*, 25.12.81). El alemán oriental Erich Honecker confesó que *"la evolución en Polonia durante estos últimos meses suscitaba una creciente inquietud entre nosotros los comunistas..."*. El reflejo de autodefensa de la burocracia ha funcionado plenamente. La solidaridad de casta es total: y esto es lo que se atreven a llamar "internacionalismo".

En los últimos años la dirección cubana ha venido apoyando activamente las revoluciones en curso en América Central. Sigue apoyando a Angola contra las operaciones militares de los racistas sudafricanos. Sin embargo, en el caso de Polonia, la prensa cotidiana cubana ha retomado fielmente los temas favoritos de la agencia soviética Tass. Así, ha dado su apoyo a la "lucha" emprendida por el Consejo militar de salvación nacional *"contra el caos y los elementos contrarrevolucionarios para salvaguardar las estructuras socialistas"* (*Granma*, 19 de diciembre de 1981). Presenta a Solidaridad como una organización manipulada por el imperialismo.

Los dirigentes del Frente Sandinista de liberación nacional (FSLN) en Nicaragua han seguido a la dirección cubana por esta vía. Estas explicaciones y estas informaciones manipuladas no pueden sino deseducar a la clase obrera y a la vanguardia cubana y nicaraguense en materia de internacionalismo proletario. Sólo pueden reforzar el bloqueo a todo avance hacia una auténtica democracia socialista. Esta orientación tendrá graves repercusiones en la conciencia política de la vanguardia obrera en toda América Latina. Obstaculizará la defensa eficaz de la revolución centroamericana, al igual que la del estado obrero cubano frente a la agresión imperialista.

b) El cinismo de las **fuerzas imperialistas** ante la proclamación de la ley marcial tiene pocos precedentes. El lunes, 14 de diciembre, el diario francés *Le Figaro* escribía: *"El general Jaruzelski no podía actuar de otra manera que como lo hizo en la noche del sábado al domingo. Es la última baza de la Polonia independiente"*. El *Washington Post* del mismo día era como un eco: *"El general Jaruzelski ha hecho un último esfuerzo para evitar el enfrentamiento. Es una última oportunidad para Polonia"*. El portavoz del gobierno alemán occidental afirmaba: *"En cuanto a la situación en Polonia, el canciller de la República Federal Alemana, Helmut Schmidt, considera necesario declarar lo siguiente: 'Lo que importa es que la crisis en Polonia esté bajo control' "*.

Los 27.000 millones de dólares que debe Polonia a Occidente, de los que más de 16.000 millones corresponden a la banca privada, son un serio motivo para que los círculos dirigentes imperialista presten su apoyo al "restablecimiento del orden". Los 450 bancos afectados habían reclamado con insistencia que se aplicara un amplio programa de austeridad, con lo que venían a sugerir que se apretaran las clavijas. Según ellos, la "solución Jaruzelski" permite contar al fin con un "interlocutor válido" en un "país responsable".

El *Wall Street Journal* reconoce sin ambages: *"La mayoría de banqueros piensan que un gobierno autoritario es bueno porque impone disciplina"*. Esta disciplina es necesaria para que los bancos imperialistas puedan transferir una parte de la riqueza producida por los trabajadores polacos a sus propias cajas fuertes. Y el Consejo Militar de Salvación Nacional no ha tardado mucho en responder a las expectativas de los gobiernos y banqueros imperialistas: éstos han podido embolsarse inmediatamente varias decenas de millones de dólares. Esto pesa más que todos los derechos democráticos.

Por lo demás, ¿por qué iban a defender los imperialistas el derecho de huelga y los sindicatos, cuando están lanzando en todas partes sus programas de austeridad y tratan de limitar constantemente la libre actividad de los sindicatos? Así, el mismo hilo conductor guía todas las declaraciones de las fuerzas burguesas e imperialistas: los trabajadores polacos han ido demasiado lejos, no han sabido plegarse a las exigencias de la austeridad; en este sentido, son responsables de este golpe de Estado; el orden y la disciplina en Polonia son exigencias de las leyes de la economía en general y de la devolución de la deuda a los bancos imperialistas en particular.

Las potencias imperialistas, y más particularmente los Estados Unidos, utilizarán a fondo la contrarrevolución burocrática lanzada por la burocracia polaca y soviética:

• Washington, so pretexto de resistir a la "intervención soviética" y al "totalitarismo", aprovechará la coyuntura internacional para incrementar su ayuda a las sanguinarias dictaduras de América Central, reforzar la coordinación de la intervención contrarrevolucionaria en El Salvador y contra las revoluciones en Nicaragua y en Granada.

Ronald Reagan da un ejemplo de esta política cuando reclama la suspensión definitiva de todas las restricciones a la ayuda militar a la dictadura turca, bastión de la OTAN, al tiempo que redobla su demagogia en torno a la defensa de la libertad... en el campo contrario. Israel, al igual que en 1956, ha aprovechado friamente el clima creado por la proclamación del estado de guerra en Polonia para anexionarse los Altos del Golán...

• Los diversos gobiernos imperialistas han lanzado una campaña para justificar su carrera de remilitarización y los recortes presupuestarios en el terreno social que le acompañan. El propio gobierno Mitterrand-Mauroy en Francia ha aprovechado la ocasión para anunciar la construcción de un séptimo submarino atómico francés. Los generales polacos, el POUP y el Kremlin han proporcionado a la reacción la ocasión soñada para tratar de dar al traste con las movilizaciones antimilitaristas que habían venido desarrollándose paralelamente al ascenso de la lucha de las masas polacas.

• Finalmente, la burguesía no reparará en medios, en el terreno político e ideológico, para tratar de encerrar a los trabajadores de los países capitalistas —con la ayuda inestimable de las burocracias sindicales y de las fuerzas reformistas— en el dilema: o bien la austeridad en la "democracia", o bien la amenaza de una "sociedad totalitaria" que impondrá igualmente la austeridad. La burguesía utilizará este argumento para reforzar su propaganda antisocialista y anticomunista.

La simple alusión a los argumentos derivados del "golpe de Varsovia" por parte de las fuerzas imperialistas basta para señalar hasta qué punto es contrario a los intereses del proletariado mundial.

El concierto antiobrero de las fuerzas imperialistas parecía armonioso. Pero en un contexto caracterizado por la crisis económica y el desarrollo de la revolución colonial, la "crisis polaca" ha suscitado una nueva agravación de las contradicciones interimperialistas. La burguesía alemana, a la cabeza de las potencias imperialistas europeas, se resiste a una escalada de guerra fría que pondría en peligro sus intereses económicos en relación con los mercados de las democracias populares y de la URSS. Inmediatamente ha aparecido como la principal otorgante de la ayuda económica a Polonia; se ha proclamado la defensora más resuelta del mantenimiento de los acuerdos de postguerra entre el imperialismo y la burocracia del Kremlin en Europa. Estos acuerdos están destinados sustancialmente a mantener el capitalismo en Europa Occidental y la influencia de la burocracia del Kremlin sobre las burocracias populares.

9. Las reacciones de los partidos socialdemócratas y de los partidos comunistas ante la derrota infringida al proletariado polaco, sólo pueden entenderse a través del

prisma de la crisis conjunta del imperialismo y del stalinismo.

Más allá de las posiciones muy diversas frente a la proclamación del estado de guerra, los aparatos reformistas han manifestado siempre, ya sea una reticencia extrema, ya sea una oposición más o menos abierta frente al combate de los trabajadores polacos. La dinámica de la lucha que se desarrollaba en Polonia contestaba demasiado radicalmente tanto su dominación burocrática sobre el movimiento sindical como su política de capitulación ante las exigencias de austeridad de la burguesía. En esta reserva o esta oposición podían entreverse, en cierto modo, una solidaridad entre burócratas. Además, los aparatos reformistas utilizarán la derrota de los trabajadores polacos para justificar sus advertencias frente a un enfrentamiento central con el enemigo de clase, que desembocaría inevitablemente en la instauración de un "estado fuerte". De este modo justificarán su política de colaboración de clases.

a) Ante la declaración de guerra contra los trabajadores polacos, los partidos socialdemócratas de la RFA, de Austria y de Gran Bretaña se han alineado básicamente tras los intereses de las burguesías imperialistas. El canciller austríaco, Bruno Kreisky, por ejemplo, afirmó: *"Pienso que la proclamación del estado de guerra en Polonia es un último intento para evitar lo peor"*. Las estrechas relaciones entre el capitalismo austríaco, su sector público y los mercados de los países del Este constituyen la base de esta actitud de aprobación del golpe y de defensa del *status quo*.

Las tímidas protestas de los dirigentes socialdemócratas (Italia, Suecia, Bélgica, Noruega, Suiza) se limitan en lo fundamental a la defensa de los derechos democráticos en general. Así evitan tener que subrayar la necesidad de una solidaridad **activa** con Solidaridad como sindicato independiente y autogestionado. Ocultan el contenido de clase de la solidaridad y la ahogan en una campaña que puede utilizar la burguesía en beneficio propio. Se niegan a utilizar sus recursos para movilizar efectivamente a los trabajadores, para multiplicar las iniciativas destinadas a romper el aislamiento en que se encuentran los militantes de Solidaridad.

La propia izquierda socialdemócrata oficial —como lo demuestra Tony Benn en Gran Bretaña y la izquierda del SPD alemán— ha guardado silencio en su gran mayoría, aceptando en lo fundamental el marco político impuesto por los aparatos.

En Francia, sin embargo, la presión de los trabajadores, la capacidad de iniciativa de la extrema izquierda, las relaciones de competencia entre el PS y el PC, el empuje dado por las direcciones del PS y de la CFDT en función de sus propios objetivos, han hecho que la fisonomía del movimiento de protesta haya tomado los rasgos de una movilización de clase en apoyo a las masas trabajadoras polacas.

b) El ascenso de la revolución política en Polonia y el desencadenamiento de la contrarrevolución burocrática han abierto una nueva etapa en la crisis de los partidos comunistas, alimentada ya, en casi todos los países, por los acontecimientos internos de la lucha de clases. Las tendencias centrífugas en todos los PC de los países capitalistas se han acentuado. La contradicción entre la referencia a la URSS y la inserción en la realidad nacional ha adquirido una tensión extrema.

La combinación de todos estos factores —en las condiciones particulares de cada país, de la trayectoria histórica del PC y de sus relaciones con los partidos socialdemócratas— se ha deducido en todo un abanico de posiciones distintas de los partidos comunistas. Esta diversidad se expresa en el interior mismo de cada PC, como en Francia, en Italia y en España, por ejemplo.

En un extremo de la escala encontramos las posturas del PC francés, del PC portugués, del PC de la RFA y de Dinamarca. Básicamente, estos PCs apoyan la proclamación del estado de guerra, que según ellos *"ha permitido que Polonia escape al peligro mortal de la contrarrevolución"*. Paradoja aparente, pero de hecho convergencia entre las dificultades de la burocracia soviética y sus intereses propios como organización, algunos de estos PC presentan *"las medidas excepcionales adoptadas por el general Jaruzelski"* como la mejor solución frente a una posible intervención soviética...

Toda su orientación consiste en propagar las promesas del general Jaruzelski en torno al carácter *"limitado y temporal de la restricción de las libertades"*, al hecho de que *"el derecho de huelga seguirá siendo un derecho imprescriptible"*.

Según ellos, toda movilización a favor de Solidaridad sólo puede *"echar leña al fuego"* e impedir que el Consejo Militar de Salvación Nacional cumpla sus promesas. Desde este punto de vista, reclamar la liberación de los militantes sindicales, el respeto de las libertades democráticas y de acción sindical equivaldría a "empujar a Jaruzelski al crimen". La burocracia de estos PCs no sólo defiende con firmeza el *status quo* sino que identifica el socialismo y la lucha contra el capitalismo con la política de las burocracias en el poder y sus regímenes.

En el otro extremo se encuentran las posiciones del Partido Comunista Italiano (PCI) y las del Partido Comunista de España (PCE).

El primero condena vigorosamente el estado de guerra en Polonia, reclama la liberación de los presos políticos, la supresión de las medidas que impiden la actividad sindical y el *"golpe asestado a la causa del socialismo con el empleo de la fuerza militar"*. Al declarar que se trata de *"tomar nota de que la fase de desarrollo del socialismo que se inició con la Revolución de Octubre ha agotado su energía propia..."*, y al vincular los acontecimientos de Polonia con la política de la URSS y la evolución interna del régimen soviético, el PCI profundiza mucho su conflicto con Moscú.

Sin embargo, toda la orientación del PCI se sitúa en el marco de una estrategia de "compromiso histórico" para Polonia, entre *"todos los componentes fundamentales de la sociedad polaca"*. Según él, había que impulsar con mayor *"firmeza y coherencia la línea de la 'renovación' "*. Por lo tanto, no se trata de pronunciarse a favor del poder democrático de los obreros, sino de la "corresponsabilidad" en el marco del propio régimen, junto al POUP, la Iglesia y la pequeña burguesía (campesinos).

Esta orientación se inscribe lógicamente en la política de "distensión internacional", de mantenimiento del *status quo*. Desemboca en un llamamiento abierto a la colaboración con las fuerzas socialdemócratas —de la RFA, de Francia y de Escandinavia—, algunas de las cuales aceptan plenamente la política de hechos consumados en Polonia.

La posición del PCE sólo se distingue de la del PCI en el carácter de su referencia a la Revolución de Octubre. La dirección del PCE mantiene esta referencia de forma explícita, pese a su carácter ritual. Esto tiene que ver con la crisis interna del PCE. En efecto, este recordatorio de la Revolución de Octubre sirve como argumento polémico contra el sector "renovador" (acusado de ser "socialdemócrata") y está destinada a neutralizar los ataques del llamado sector "prosoviético". Hay que destacar, además, que ni el PCE ni las Comisiones Obreras (vinculadas al PCE) han participado o convocado ninguna movilización en solidaridad con los trabajadores polacos.

La forma y la naturaleza del ascenso de masas en Polonia, al igual que las contradicciones entre los PC y en el interior de cada PC, estimulan en el movimiento sindical, en una serie de países europeos, unas diferenciaciones análogas.

El impacto de los "acontecimientos polacos" en el movimiento obrero internacional, que se entrelazan con los problemas de estrategia anticapitalista planteados por la crisis y las necesidades de la solidaridad combativa con la revolución en América Central o de la lucha contra la remilitarización, se convierte en un factor importante de politización de un sector de vanguardia de la clase obrera. Ha acelerado, sobre todo en Francia, el desarrollo de una oposición, particularmente en la CGT, y le ha permitido avanzar en su homogeneización.

10. El movimiento obrero internacional debe lanzar una campaña masiva y unitaria de ayuda a la resistencia de los trabajadores polacos. La consigna "proleta-

rios de todos los países, uníos" debe ser la divisa del movimiento de solidaridad con Solidaridad.

El combate de los trabajadores polacos prosigue. Su difícil resistencia abre una nueva etapa en la lucha del proletariado contra el totalitarismo burocrático. En esta dura batalla están forjándose los dirigentes obreros, jóvenes e intelectuales, de la revolución política. Cuanto más eficaz sea la resistencia, tanto más de demostrará que la burocracia es incapaz de imponer sus soluciones contrarrevolucionarias, de imponer el silencio, tanto en el interior como a nivel internacional, tanto más el rechazo masivo de los trabajadores se colmará de esperanza.

Por lo tanto, hay que rechazar cualquier orientación que se contente con hacer de esta solidaridad un simple "homenaje a las magníficas luchas de los trabajadores polacos", enterrando de antemano cualquier perspectiva de futuro para el combate actual, sumiéndolo así en el silencio y el aislamiento. Este enfoque sólo puede hacer el juego de los aparatos burocráticos de todo pelaje.

La IV Internacional compromete todas sus fuerzas en el impulso, en el seno del movimiento obrero internacional, de la campaña de solidaridad con las masas proletarias de Polonia. Todos los que hoy, en las filas de la clase obrera, se niegan a impulsar esta movilización, dividen a las masas obreras, en su propio país y a escala internacional.

Movilizarse contra la prohibición de Solidaridad, es apoyar al mismo tiempo a los trabajadores polacos y defender los derechos políticos y sindicales de todos los trabajadores, de Turquía, de Brasil, de El Salvador, del Estado español o de Rumania. Reclamar la suspensión del estado de guerra, la puesta inmediata en libertad de todos los presos, la supresión de todas las trabas impuestas a las libertades democráticas, al derecho de reunión y de organización, es defender estas libertades contra los ataques del imperialismo y de las burocracias totalitarias. Organizar la solidaridad activa con los trabajadores polacos, actualmente, es facilitar y preparar el mismo apoyo activo del movimiento obrero internacional con el combate emprendido por el pueblo salvadoreño contra la Junta militar y demócrata cristiana y el imperialismo norteamericano. Estas son las lecciones más elementales del internacionalismo proletario.

• Todos los vínculos establecidos durante los meses pasados entre el sindicato independiente y autogestionado de los trabajadores polacos y el movimiento obrero de los países capitalistas, deben utilizarse para romper el aislamiento en que quiere sumir el general Jaruzelski a las masas polacas. Prestar una ayuda material, alimenticia y médica, sigue siendo una de las tareas más importantes del momento. Esto debe permitir restablecer los lazos, hacer circular la información y dar a conocer a los trabajadores polacos quiénes los apoyan efectivamente en el mundo: sus hermanos de clase y no los banqueros imperialistas que han recibido el golpe con alivio. Esta ayuda, que debe pasar a través de organismos independientes del Estado polaco (como la Iglesia, que actualmente es la única institución legal independiente), puede facilitar la recuperación de los lazos entre militantes de SOlidaridad y sectores de la población. Al hacerlo todo por enviar comisiones sindicales para investigar sobre la represión que sufren los militantes de Solidaridad, el movimiento obrero desvelará la hipocresía tanto de los burócratas que hablan del "respeto de las libertades" como de los portavoces del imperialismo, que cierran los ojos ante la suerte de los militantes sindicales, tanto en Polonia como en turquía.

• En el movimiento obrero mismo, los marxistas revolucionari s explicarán sistemáticamente los objetivos y las acciones de Solidaridad. Tanto el funcionamiento democrático del sindicato, la amplia discusión pública de las principales opciones en los debates sobre la autogestión o las experiencias de control obrero y social, deben convertirse en patrimonio del movimiento obrero internacional. De este modo se minará con la máxima eficacia la "solidaridad burocrática" que tantas veces se ha puesto de manifiesto desde 1980, ya sea en forma de una indiferencia calculada por parte de las direcciones sindicales, ya sea con la de una hostilidad abierta, ya sea con la de una desnaturalización de los objetivos de los trabajadores en el sentido de fomentar los proyectos de colaboración de clases defendidos por los aparatos reformistas (cogestión, "compromiso histórico").

Ampliando al máximo esta solidaridad obrera, en la unidad e independencia de clase, podrán ponerse en jaque, parcialmente, los intentos del imperialismo de aprovechar los acontecimientos polacos para reforzar sus posiciones ideológicas y políticas.

• Los marxistas revolucionarios se opondrán a todas las propuestas de boicot contra Polonia o la URSS por parte de los países imperialistas. Semejante campaña sólo puede hacerle el juego a las grandes maniobras políticas anticomunistas de Ronald Reagan, que trata de camuflar su política criminal en América Central y otras partes. El apoyo a una campaña de "sanciones eficaces" equivaldría a reclamar que los grandes bancos y las potencias imperialistas estrangulen aún más a Polonia, con todas las consecuencias que tendría ello para las masas polacas.

Porque el lector no afectará a los privilegios de la burocracia. ¿Y cómo hacer creer que la revuelta de los trabajadores se incrementaría con una miseria aún mayor? Es más, esta campaña de sanciones equivaldría a sembrar las ilusiones más mistificadoras en torno a la naturaleza y el papel de los bancos imperialistas, y a darle al movimiento obrero el objetivo de presionar sobre los bancos para "ayudar" a los trabajadores polacos. En fin, toda orientación de este tipo facilitará en última instancia la política de las direcciones de los PC —la campaña nacionalista de la burocracia soviética desempeña el papel de la "ciudadela asediada"—, y comportará el aislamiento del pueblo polaco, que es lo que precisamente busca el general Jaruzelski. La historia ha demostrado que el desarrollo del stalinismo vino favorecido por el aislamiento de la URSS.

• La IV Internacional situará su campaña de solidaridad con Solidaridad en estrecha relación con su esfuerzo por estimular las movilizaciones contra la remilitarización, contra la política agresiva de la OTAN, contra las iniciativas criminales del imperialismo norteamericano —un verdadero agente belicoso— en América Central y en el Caribe.

En este terreno salta a la vista la unidad de intereses de la clase obrera a escala mundial. Cualquier reticencia en el apoyo a los trabajadores polacos sólo puede frenar y dividir la movilización contra el rearme nuclear en Europa, por una "Europa desnuclearizada desde Portugal a Polonia" y contra la agresión imperialista en América Central. Al mismo tiempo, cualquier abstención u oposición —como se observa en las filas socialdemócratas— frente a la movilización contra la OTAN o al apoyo a la lucha revolucionaria de los pueblos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, sólo puede debilitar la unidad y amplitud del apoyo al combate de la resistencia de las masas polacas.

La construcción y el refuerzo de una organización revolucionaria internacional, la IV Internacional, representa, en el seno de la vanguardia proletaria, el esfuerzo consciente y necesario para cumplir el conjunto de estas tareas.

— ¡Solidaridad con Solidaridad!

— ¡Abajo la dictadura militar de la burocracia!

— ¡Libertad inmediata de todos los presos políticos, sindicalistas, estudiantes e intelectuales!

— ¡Restablecimiento de todas las libertades políticas, sindicales y civiles!

— ¡Viva la solidaridad de los trabajadores de todos los países con todas las luchas de liberación, en defensa de todos los explotados y oprimidos, que emprenden un único combate por el mundo socialista de mañana!



Nueve meses de Gobierno de izquierdas

Daniel Bensaid

Han pasado 9 meses desde la derrota de la derecha en las elecciones presidenciales y legislativas francesas. El cambio de gobierno no ha comportado ni una catástrofe económica ni una revolución social, contrariamente a las predicciones de la derecha, destinadas a soliviantar a la "mayoría silenciosa". Por consiguiente, el Partido Socialista y el Partido Comunista no tienen ninguna coartada para no asumir las reivindicaciones de la clase obrera.

EN su primera valoración global de la nueva presidencia, *Le Monde* habla de una "transición suave", viendo en ello la prueba de la solidez y del carácter democrático de las instituciones de la V República instauradas por el golpe de estado de 1958.

Mitterrand se toma su tiempo

Sin embargo, este análisis es superficial. Las características fundamentales de la nueva situación son distintas:

- En primer lugar, la profundidad y duración de la crisis económica internacional, que está forzando a los empresarios a tomar medidas drásticas para reestructurar sus empresas a expensas de los trabajadores.
- En segundo lugar, la concentración de poder sin precedentes en manos de partidos que dicen representar a la clase obrera —la Presidencia de la República, con los amplios poderes de que goza en virtud de la Constitución, el gobierno, la mayoría de ayuntamientos y el Parlamento, en el que el Partido Socialista tiene la mayoría por sí solo.
- Finalmente, la profunda confusión reinante en los partidos políticos de la burguesía —que se construyeron y funcionaron durante más de un cuarto de siglo sobre la base de el control exclusivo del aparato de Estado.

Todas estas circunstancias tienden a preparar una importante prueba de fuerzas entre las clases. Sin embargo, el principal argumento de Mitterrand consiste en decir actualmente que el gobierno "puede esperar". A diferencia de las anteriores experiencias de gobiernos de izquierda, este no va a ser un breve episodio, sino una carrera contra reloj. El presidente es elegido para siete años, y la mayoría parlamentaria para cinco. Por tanto, afirma, puede aplazar el cumplimiento de sus promesas durante un largo período, evitando así la quiebra de la economía y la alteración del clima social.

Los dirigentes gubernamentales sólo pueden hablar así debido a la situación existente en el movimiento obrero. Las victorias del 10 de mayo y del 21 de junio

fueron la expresión electoral de la relación de fuerzas entre las clases. Pero no fueron la prolongación de un ascenso de las movilizaciones. Desde 1977, mientras que el movimiento obrero ha mantenido una elevada combatividad latente, se ha visto debilitado por las divisiones existentes entre sus principales organizaciones, tanto en el plano político como en el plano sindical.

En 1980, el número de días de huelga fue el más bajo desde 1953. Durante los últimos cuatro años, la confederación sindical más importante, la CGT ha perdido practicamente la mitad de sus afiliados, descendiendo de 2,3 a 1,3 millones.

Desde septiembre, las victorias electorales se han reflejado en un nuevo ascenso de las luchas en las fábricas, para imponer la readmisión de los sindicalistas despedidos, recuperar el poder adquisitivo perdido y defender la seguridad del empleo. Pero a diferencia de junio de 1936 —tras la elección del Frente Popular—, no se ha dado ninguna tendencia a la generalización y centralización de estas luchas.

Los militantes obreros más conscientes han aprendido de la experiencia de la huelga general de 1968 (una huelga general sin solución política) y de la Unión de la Izquierda (una coalición electoral sin movilización unitaria en la base). Comprenden las implicaciones que comportaría inmediatamente un movimiento generalizado. Implicaría un choque frontal con la patronal, con miras a imponer soluciones a la crisis estructural del sistema que vayan en interés de los trabajadores.

Antes de empreder este camino es necesario acumular experiencias. Las ilusiones que aún albergan varios millones de trabajadores con respecto a la nueva mayoría, deben disiparse. Pero ante todo, lo que se requiere es una reorganización de los trabajadores más avanzados a nivel sindical y político. Mitterrand está tratando de sacar ventaja de este retraso cuando dice que su gobierno puede "esperar".

A este respecto, la burguesía sólo puede estar de acuerdo con él. También necesita tiempo. Utiliza el peso de las instituciones establecidas para obstruir la política del gobierno. Los patronos ejercen una presión contínua mediante el chantaje. Sus portavoces políticos no dejan pasar ninguna oportunidad para elevar el grito al cielo en torno a un nuevo "Gulag socialdemócrata" en Francia. Pero sería un error concluir por eso que la burguesía busca un enfrentamiento a corto plazo. Antes tiene que reorganizar sus fuerzas políticas. No puede seguir permaneciendo políticamente desnuda durante mucho tiempo, mientras la organización de empresarios (la CNPF) actúa como su principal instrumento.

Las ruidosas quejas de los capitalistas le permiten al gobierno dar la apariencia de que asume un tono duro, mientras que nada le obliga a tomar medidas concretas.

Las medidas del gobierno relativas a la jornada laboral son sintomáticas. La semana laboral legal se reducirá de 40 a 39 horas. Pero a cambio de esta disminución, los patronos obtendrán concesiones que han estado tratando de lograr sin éxito desde 1978. Mientras los asalariados que se encuentran en el fondo de la escala no tendrán que sufrir las reducciones correspondientes, los demás probablemente sí que tendrán que hacerlo. Es más, los patronos han conquistado el derecho a tomar toda una serie de medidas para reprogramar las horas de trabajo durante el período de un año, con el fin de lograr una mejor utilización de la maquinaria y un mayor ajuste del horario laboral a las fluctuaciones de la producción. El resultado se traducirá en el crecimiento de los turnos de noche y del empleo a tiempo parcial, y otras prácticas de este tipo.

Se aproxima el momento de las opciones decisivas

Este es el contexto y la relación de fuerzas que han condicionado la política del gobierno Mauroy.

Mitterrand ha tratado de presentar su política como algo distinto de la política socialdemócrata tradicional. En un momento en que la crisis económica dificulta en todas partes el mantenimiento del Estado del bienestar, dice querer centrarse en la ampliación del sector nacionalizado y de la planificación democrática.

Si se examina esto más de cerca, ¿cuál es el balance de los primeros meses del nuevo gobierno? En lo que respecta a los derechos democráticos, el nuevo gobierno y el Parlamento han tomado una serie de iniciativas importantes. Han abolido la pena de muerte. Han restablecido el derecho de asilo (aunque los refugiados políticos vascos continúen sometidos al arresto domiciliario). Han abolido los tribunales especiales como el Tribunal de la Seguridad del Estado (pero no los tribunales militares). Y han revocado toda una serie de leyes represivas.

Mientras que estas medidas han creado una disposición favorable hacia el nuevo gobierno, la prueba real se sitúa en otro lugar, en el terreno de los salarios y de los puestos de trabajo.

Durante los últimos 6 meses, la tasa de inflación ha sido del 15,5%. La media anual ha sido del 14,1%. El resultado neto es que las medidas adoptadas para mejorar los ingresos han impedido, en el mejor de los casos, la disminución del poder adquisitivo.

El número de parados ha rebasado la marca de los dos millones. Por supuesto, el incremento del desempleo se debe básicamente a la crisis y a lo que normalmente se denomina la "herencia" del gobierno anterior. Pero ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora ofrecen perspectiva alguna de mejorar la situación. La reducción de la semana laboral a 39 horas no creará de hecho ningún nuevo puesto de trabajo, dados los aumentos de la productividad.

Las nacionalizaciones decididas por el Parlamento extenderán el sector público hasta tal punto que este abarcará el 30% de las ventas y el 25% de los salarios de toda la industria. Pero hasta ahora, las empresas dominadas por el capital extranjero han escapado a la nacionalización. La indemnización prometida para estas compañías que deben nacionalizarse se ha calificado de "justa" por los propios representantes de la patronal.

Las concesiones efectuadas por el gobierno le permitirá a las empresas como Matra reorganizar su actividad en torno a sus divisiones más beneficiosas. Al mismo tiempo, el gobierno no ejerce ningún control sobre la inversión privada, que se mantiene a un nivel muy bajo.

Así, hasta ahora el gobierno se ha contentado con estimular una recuperación moderada incrementando ligeramente los ingresos reales y los beneficios sociales de las capas menos privilegiadas, así como aumentando el déficit presupuestario. En 1981, este déficit ha aumentado de 29.000 a 76.000 millones de francos. En 1982 alcanzará los 95.000 millones.

Esta política de recuperación moderada está destinada a ganar tiempo y preparar las condiciones para tomar el tren de la recuperación internacional. Las últimas previsiones de la OCDE —que siempre se sitúan en el lado optimista—, establecen una tasa de crecimiento medio del 1,25% en 1982 para la CEE, y del 2,5% para Francia. Esta ligera recuperación le permitirá a Francia evitar simplemente el empeoramiento del desempleo, pero no su reabsorción. Se aproxima el tiempo en que habrá que tomar opciones decisivas —o bien enfrentarse a la burguesía, o irse por la tangente aplicando una política de austeridad de "izquierdas".

Enfrentado a esta alternativa, el gobierno está proyectando una serie de medidas destinadas a dividir la negociación colectiva y el proceso de arbitraje en una serie de niveles distintos. Su objetivo consiste en evitar que la supercentralización de las instituciones de la Vª República pueda servir para canalizar reivindicaciones al gobierno.

Esta es la razón por la que el gobierno se ha apresurado a promulgar una ley de descentralización que otorgará nuevas responsabilidades a las asambleas regionales en la administración del problema del paro. Este es el sentido, también, de las leyes proyectadas sobre los derechos de los trabajadores en la empresa. Y más en general, esto explica la defensa oficial de una política de acuerdos a todos los niveles —negociaciones entre empresarios y trabajadores sobre la semana laboral, creación de comités laborales locales tripartitas, que englobarían a representantes de los trabaja-

dores, de la dirección y del gobierno, los acuerdos mutuos entre el gobierno nacional y los ayuntamientos, etc.

El movimiento obrero se reorganiza

Lo que será decisivo en esta situación es la reorganización que se ha iniciado en el movimiento obrero.

El Partido Socialista alcanzó el poder como una máquina electoral, no como un partido arraigado en las masas. Hay un enorme abismo entre los nueve millones que le votaron y sus 200.000 afiliados. Los resultados que hasta ahora ha obtenido el PS no comportan ninguna afluencia masiva de nuevos afiliados, y en los lugares de trabajo permanece bastante débil. El PS quiere aprovechar la ventaja que obtuvo sobre el PC a nivel electoral para ganarle a nivel sindical, esperando relegar a la CGT al segundo lugar después de la CFDT. Pero se preocupa mucho ante la posible afluencia masiva de activistas, que ampliaría los conflictos entre el partido y el gobierno.

Hasta dos meses antes de las elecciones presidenciales, el Partido Comunista esperaba una victoria de Giscard. Pagó su precio por su política de división, perdiendo entre el 4 y el 5% de votos. En estas circunstancias, el PC optó entonces por firmar un acuerdo para integrarse en el gobierno. Al mismo tiempo, trató de conservar una imagen más combativa, sobre la base de la palabrería y las posturas formalmente más radicales que adopta la CGT.

Sin embargo, el golpe militar burocrático en Polonia acelerará sin duda el proceso de crisis, tanto en el PC como en la CGT. Ha sacado a la luz la contradicción entre la sumisión del PC a la URSS, reafirmada en su último congreso, y la creciente integración del partido en el aparato estatal nacional. Esta contradicción tiende cada vez más a dividir al propio aparato del partido.

En un primer momento, la crisis del stalinismo ha beneficiado a la socialdemocracia. Un ejemplo de ello es el éxito espectacular del Partido Socialista en las elecciones legislativas. También puede producirse a nivel sindical, temporalmente, pues la CFDT se beneficia de sus acciones en solidaridad con Solidarnošc. Pero en última instancia, lo que decidirá sobre la actitud de las masas de trabajadores son los problemas cruciales, los puestos de trabajo y los salarios.

En este terreno, tanto el PC como el PS, tanto la CFDT como la CGT, están de acuerdo en que es necesario tratar a los patronos con consideración. De ahí que la crisis del movimiento obrero no adopte la forma de un simple desplazamiento del stalinismo a la socialdemocracia.

Lo que se produce más bien es un proceso de agrupamiento más amplio, caracterizado por el surgimiento de corrientes de oposición en los sindicatos, así como en el PC y posiblemente en el PS.

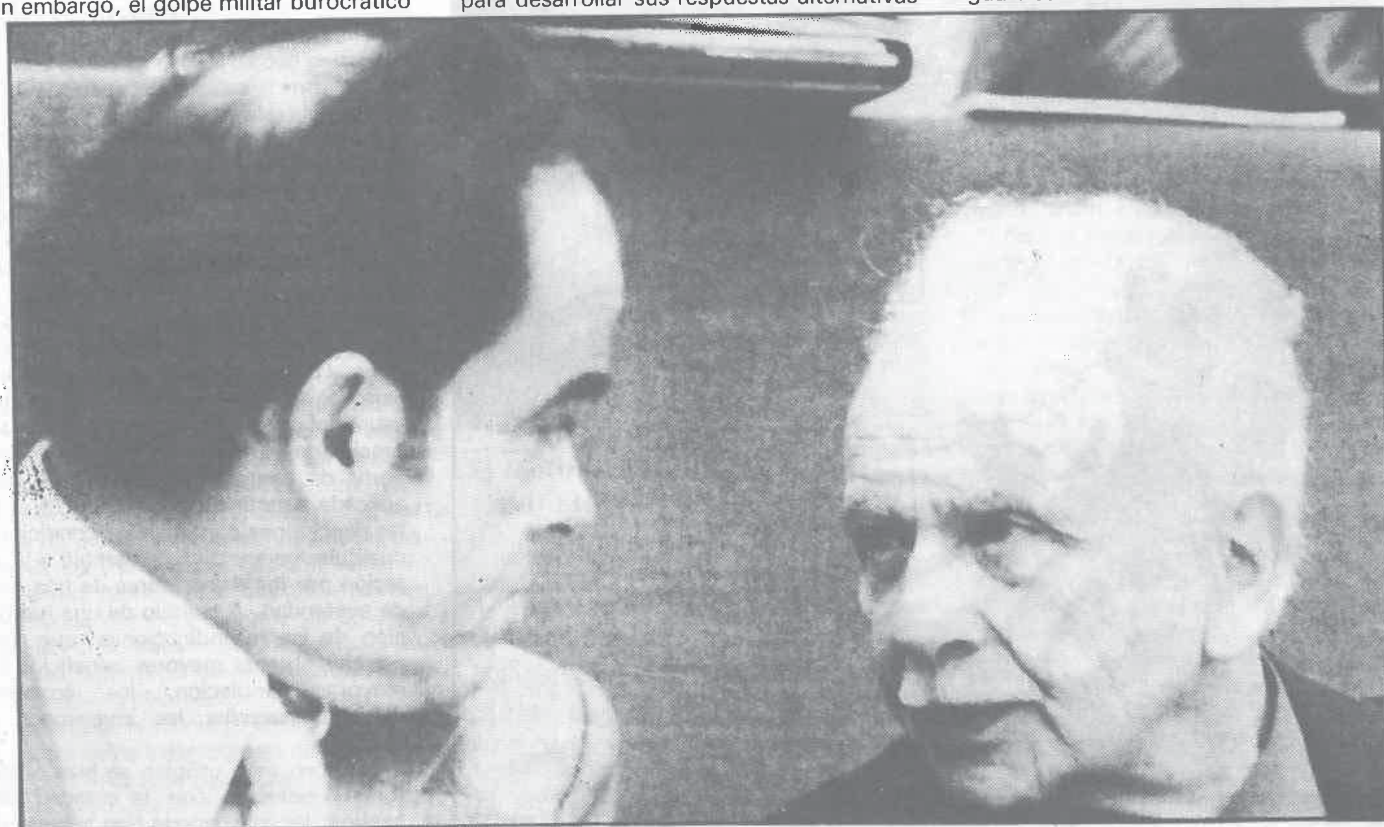
La Liga Comunista Revolucionaria, sección francesa de la IVª Internacional, celebró su Congreso a comienzos de enero, para desarrollar sus respuestas alternativas a esta situación nueva.

Sus ejes principales son los siguientes:

1. Como respuesta a la profunda crisis, es necesario formular reivindicaciones inmediatas y transitorias que indiquen el camino hacia las soluciones que van en interés de la clase obrera. Dado el carácter central del problema del paro, la LCR ha lanzado una campaña específica para presionar al gobierno y al parlamento a que adopten una ley que reduzca la semana laboral a 35 horas sin pérdida del salario y sin que los trabajadores den nada a cambio.

2. Para superar la crisis, el movimiento obrero debe romper con la burguesía. Esto implica tanto un firme contraataque contra el chantaje patronal y las maniobras de los capitalistas, y un rechazo de la camisa de fuerza que constituyen las instituciones de la Vª República (tanto el Consejo Constitucional como el Senado han tratado de obstaculizar los cambios alargando los problemas de procedimiento). Esto significa rechazar las exigencias de la jerarquía militar y del sistema de alianzas imperialistas. En este último aspecto, Mitterrand se ha expresado abiertamente a favor del despliegue de los misiles Pershing en Europa. Es más, la ley de descentralización no reconoce el derecho a la independencia de las colonias de Nueva Caledonia y las Antillas.

3. La necesidad de un partido revolucionario implantado en la clase obrera industrial, como elemento fundamental del proceso de clarificación política dentro de la clase obrera y del surgimiento de una vanguardia.☐





El movimiento sindical frente al Pacto Social

Franco Turigliato

El Congreso Nacional de la CGIL, la principal Confederación Sindical italiana, a finales de 1981, cerró una larga fase de congresos sindicales. Cada una de las Confederaciones conoció una doble fase de debates a partir de la primavera de 1981: los congresos de los sindicatos de ramo, celebrados a nivel de base, de unión local, después de unión regional y finalmente a nivel nacional; los congresos interramas, celebrados también a nivel de secciones, de uniones locales y regionales y a nivel nacional.

Los Congresos confederales de la UIL, de la CISL y de la CGIL fueron los momentos culminantes de la discusión. El debate no fue rutinario en ninguna de estas tres confederaciones. Y esto es aún más cierto en lo que se refiere a los ramos industriales que fueron los principales protagonistas de estos últimos diez años de lucha. Estos Congresos se han celebrado en una coyuntura de grave crisis económica, de violento ataque patronal contra el empleo, los salarios y la escala móvil. Así, las cuestiones generales de estrategia sindical han estado estrechamente relacionadas con las tareas inmediatas de las organizaciones, con las opciones políticas planteadas para oponerse a la ofensiva patronal.

LOS Congresos sindicales de 1973 y de 1977 se habían desarrollado en un momento en que el movimiento sindical italiano estaba en su apogeo. Dichos congresos habían sido sobre todo asambleas propagandísticas, durante las cuales las confederaciones habían dado muestras de su poderío organizativo y se habían pronunciado a favor de una política general de reforma y de cambio, y de un desarrollo económico diferente, que debían asumir el gobierno y los empresarios bajo la presión de las luchas de los trabajadores. A partir de enero de 1978, con la política aplicada a partir de la asamblea de la EUR, las direcciones confederales condicionaron cualquier perspectiva de cambio a la aceptación por los trabajadores de una política de austeridad. A cambio de una remodelación de las reivindicaciones, que debería permitir obtener mayores beneficios y una mayor acumulación, los empresarios debían desarrollar las inversiones y el empleo.

Este proyecto utópico se hizo añicos al tomar contactos con la realidad de los hechos: las inversiones han servido sobre

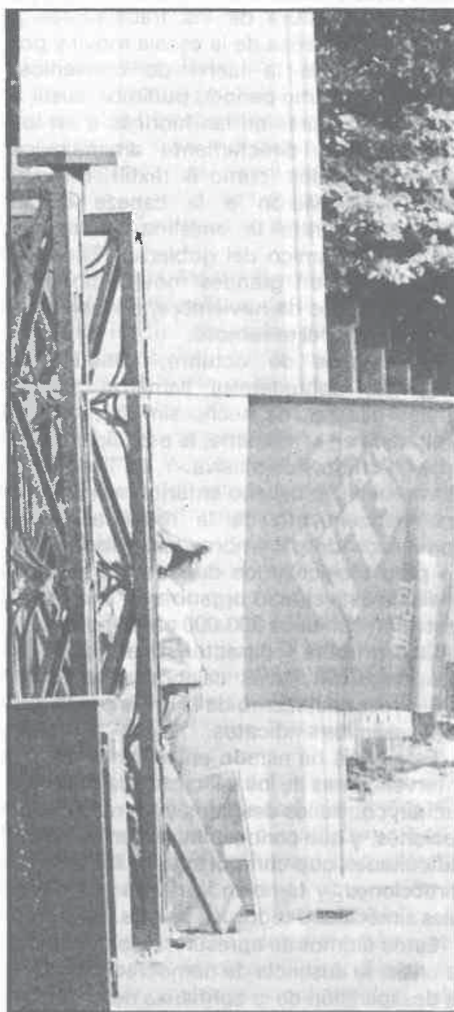
todo para reducir el número de puestos de trabajo, y la crisis económica se ha agravado; la patronal se ha organizado para tomar la revancha contra los trabajadores, para volver a arrebatarles lo que éstos habían conquistado a lo largo de tantos años de luchas victoriosas. En este contexto, las organizaciones sindicales se han mostrado cada vez menos capaces de defender los intereses de los trabajadores, y se han visto afectadas por una crisis muy seria. No se trata aún de una crisis vertical, pero no por ello es menos grave y profunda.

La Patronal, a la ofensiva

¿Cuáles son los rasgos fundamentales de la situación social italiana y de la situación en las empresas? La lucha de los trabajadores de la FIAT en octubre de 1980, contra los proyectos de despido masivos por parte de la patronal, fue el inicio de una nueva etapa. En aquel momento, los obreros de la FIAT mostraron una extraordinaria voluntad de lucha; la solidaridad de los demás trabajadores italianos también fue muy importante. Pero las direcciones sindicales y la de los partidos reformistas se mostraron igual de decididas a poner fin a esta lucha mediante un compromiso catastrófico para los trabajadores, con el fin de evitar que la crisis social y política desembocara en un choque frontal con las fuerzas burguesas.

Después del de la FIAT, actualmente se cuentan por decenas, incluso por centenas, los acuerdos de la misma naturaleza firmados en las empresas bajo la presión de las direcciones sindicales centrales; en todos los sectores industriales, la patronal ha lanzado gigantescos planes de reestructuración y reconversión, decretando que había decenas de miles de trabajadores "sobrantes". Las direcciones sindicales han hecho todo lo posible por evitar que se reprodujeran luchas como la de la FIAT, y han firmado acuerdos que, al igual que en la FIAT, condenan a miles de trabajadores a un paro técnico completo durante periodos de duración indeterminada y sin ninguna garantía de volver a obtener algún día un puesto en su fábrica. De hecho, estos acuerdos avalan una reducción del nivel de empleo a través deñ bloqueo del *turn over*, la jubilación anticipada y, finalmente, las "listas de movilidad externa", es decir, las listas de los trabajadores que son despedidos de una fábrica pero que deberían ser contratados por otra (aunque no se sepa muy bien cuál, pues todos los sectores industriales, aparte del de armamento, están reduciendo sus plantillas).

A la vista de la fuerza política y organizativa global de la clase obrera, de sus organizaciones sindicales y políticas, la patronal no ha logrado llevar a cabo aún directamente estos despidos ni a descomponer así el frente obrero. Pero el recurso masivo y prolongado al paro técnico le ha permitido mantener fuera de las empresas a una parte importante de la vanguardia obrera. Todos los principales grupos industriales italianos se ven afectados; los de la química (Montedison y las empresas de la ENI), los del automóvil (FIAT y ALfa Romeo), los de la electrónica, con algunas pocas excepciones, y los de las telecomunicaciones. Sin hablar ya del sector textil, que conoce ya desde hace varios años un proceso acelerado de reestructuración.



El recurso masivo al paro técnico

Actualmente hay, según cifras oficiales, dos millones de parados en Italia. Las horas de paro técnico, durante los seis primeros meses de 1981 y en comparación con el mismo período de 1980, han pasado de 90 millones a más de 240 millones. En otoño de 1981, esta dinámica se agravó aún más. El sur no es la única rgión golpeada por esta crisis. Los bastiones industriales del norte, las grandes regiones industriales de Piemonte y de Lombardía (a donde acuden tradicionalmente los parados del sur), los dos grandes centros urbanos de Turín y Milán, son actualmente las zonas más duramente golpeadas por la recesión y la reducción del nivel de empleo.

En el Piemonte, las horas de paro técnico durante los 9 primeros meses de 1981, pasaron de 15,5 millones en el mismo período de 1980, a más de 110 millones; en esta región hay como mínimo 350 empresas en crisis. Hay unos 46.000 trabajadores en paro técnico completo; el número de inscritos en las agencias de empleo alcanza los 135.000, de los que más de 67.000 son jóvenes que buscan su primer empleo.

En Lombardía se cuentan 800 empresas en crisis y 50.000 obreros en paro técnico durante varios meses. La previsión es que a finales de 1981 habrá habido 60 millones de horas de paro técnico, es decir, tres veces más que en el año anterior.

En la ciudad de Milán, el número de inscritos en las agencias de empleo pasó de 55.000 en 1978 a 83.000 en diciembre de 1981. También aquí se trata sobre todo de jóvenes. Desde comienzos de año se perdieron 10.000 puestos de trabajo, tan sólo en la industria del metal.

Naturalmente, la situación es aún más grave en las regiones del sur, y sobre todo en las zonas situadas al sur de Nápoles, afectadas por el terremoto de 1980. Desde hace un año, en estas regiones no se ha hecho *nada*, por parte del gobierno, por reconstruir las zonas siniestradas, donde reina la mafia napolitana, la *camorra*, y el clientelismo demócrata cristiano.

La amplitud del recurso al paro técnico resulta aún más evidente si examinamos la situación de tres categorías concretas. En la industria textil, el paro técnico afecta a 150.000 trabajadores, de un total de aproximadamente 1,5 millones; más o menos de 1/4 a 1/3 de los trabajadores del metal, entre el 1,5 millones que cuenta esta categoría, están en paro técnico; finalmente, 1/3 de los trabajadores de la química (sobre un total de 600.000) conoce la misma suerte.

El elevado número de trabajadores que se encuentran en paro técnico ha tenido un efecto muy negativo en el funcionamiento del sindicato a nivel de empresa: los consejos han tenido graves dificultades a causa de la fálta de delegados y de la recomposición de los equipos de trabajo; esto ha contribuido a reducir su autonomía frente a los aparatos sindicales.

Al mismo tiempo hay que decir que los efectos del recurso al paro técnico no pueden compararse con las repercusiones de los despidos auténticos, y esto no sólo a causa de la compensación salarial (que alcanza el 90% del salario original). Los obreros condenados al paro técnico siguen inscritos en el sindicato y conservan lazos orgánicos con él a través de coordinadoras que constituyen estructuras reconocidas por el sindicato; conservan también sus

vínculos, aunque más ocasionales, con la fábrica, participando en las asambleas internas. Por lo demás se nota que las amenazas de la situación actual impulsan cada vez más a los trabajadores a reforzar su coordinación y a estrechar sus vínculos con el resto del movimiento sindical.

La patronal, a su vez, intenta aprovechar los éxitos obtenidos hasta el momento para alzarse con una victoria política que le permita restablecer la antigua relación de fuerzas a su favor. Trata también de ganar en todos los terrenos económicos, a saber, el de la reducción de los salarios, la desarticulación de la escala móvil, el impago de los tres primeros días de baja por enfermedad; no quiere que se le imponga ningún límite en sus proyectos de reestructuración y quiere tener las manos libres para utilizar a su antojo la mano de obra, es decir, recuperar de nuevo el derecho al despido.

En la fase actual, la patronal trata de impedir sobre todo que los trabajadores desciendan a la calle con motivo de la renovación de los convenios. Esta renovación ha dado pie hasta ahora a auténticos enfrentamientos políticos, en cuyo transcurso se han movilizado los trabajadores unitariamente y siempre han logrado arrancar conquistas económicas significativas o impedir que el enemigo de clase retome la iniciativa.

La patronal sabe muy bien que los trabajadores tienen una voluntad muy fuerte de utilizar una vez más el instrumento de la lucha en torno a los convenios, para defender sus salarios y los puestos de trabajo. De ahí que haya solicitado el aplazamiento de la renovación de los convenios y haya anunciado que opondría una feroz resistencia con el fin de quebrar las luchas obreras. Para lograr este objetivo, la organización patronal Confindustria ha sabido aprovechar el papel desempeñado por el gobierno del republicano Spadolini, que las direcciones del movimiento obrero presentaron a los trabajadores como una novedad "positiva" al no tratarse ya de un demócrata cristiano.

Imponer un "tope" a las reivindicaciones salariales

Desde hace varios meses, el gobierno, la Confindustria y las direcciones sindicales han entablado negociaciones con miras de llegar a la conclusión de un pacto social. El gobierno se comprometería a contener la inflación en 1982 por debajo del "tope" del 16%, y a cambio, los sindicatos aceptarían que las reivindicaciones obreras no rebasaran dicho "tope". Todo el mundo espera que la inflación sea superior a esta cifra, y todo el mundo sabe que el gobierno es el principal responsable de la inflación, lo que significa que las direcciones sindicales se plantean, de hecho, una política que comportará una nueva disminución de los salarios obreros.

De una manera más general, con este pacto, social, el objetivo consiste en poner una auténtica camisa de fuerza a las plataformas reivindicativas en torno a los convenios, y en suprimir la autonomía de las categorías sindicales más combativas.

La gravedad de la situación no ha comportado ninguna desmoralización ni reflujo de la clase obrera. Al igual que en la primavera, durante el otoño proliferaron las tomas de postura de los trabajadores a favor de la defensa de la escala móvil y por la apertura de la lucha de convenios. Durante el mismo período pudimos asistir a luchas muy duras en las fábricas o en los sectores más directamente amenazados por los despidos (como el textil). Milán y Génova estuvieron a la cabeza de la respuesta contra la enésima vuelta del tornillo económico del gobierno. También se desarrollaron grandes movilizaciones a finales del mes de noviembre, en las zonas afectadas por el terremoto.

En el mes de octubre, cuando los dirigentes confederales llamaron a una huelga general, de hecho simbólica y mal preparada en la industria, la participación, a pesar de todo, fue masiva. Y en Turín, tras el traumatismo del año anterior, asistimos a un relanzamiento de la movilización; a comienzos de diciembre, los trabajadores en paro técnico y los de las empresas en crisis de esta ciudad organizaron una manifestación con unos 300.000 participantes.

La primera característica de los congresos sindicales celebrados en 1981 fué el reconocimiento de la crisis por la que atraviesan los sindicatos.

Esta crisis ha estado en el centro de las intervenciones de los militantes de base que luchan contra los despidos y las reestructuraciones, y que conocen muy bien todas las dificultades que comporta la política de las direcciones, y también la de los responsables sindicales a todos los niveles.

Estos últimos se apresuraron a denunciar la crisis, la ausencia de democracia interna, la desaparición de la confianza de los trabajadores. Se trataba por supuesto de una autocrítica general cuyo único fin consistía en enmascarar sus propias responsabilidades, atribuirlas a las demás confederaciones sindicales o a los aparatos de la competencia, o, por aún, de buscar chivos expiatorios en los consejos de fábrica. Todo ello para no poner en tela de juicio el motivo central de la crisis: las línea política de aceptación de la austeridad, de los sacrificios, de la política industrial de la patronal y del gobierno.

Una crisis que afecta a todo el movimiento sindical

La crisis se manifiesta en primer lugar con la dificultad encontrada para renovar los carnets de afiliación y ganar nuevos afiliados. No se trata de un hundimiento, como puede ser el caso en el Estado español, sino de una disminución limitada a determinados sectores. En efecto, las conquistas obtenidas gracias al sindicato, hasta un período aún reciente, han asentado profundamente entre los trabajadores la conciencia de la necesidad de conservar un instrumento de lucha colectiva. Algunas operaciones de maquillaje de las cifras han permitido que las tres confederaciones oculten en parte sus dificultades. Pero los sindicatos sólo logran mantener un número de afiliados igual al del año pasado si incluyen a los jubilados, cuyo número aumenta todos los años pero que no representan ya fuerzas vivas en las empresas.

Las cifras de la CGIL en Lombardía, para 1981, ilustran este fenómeno: 23.000 trabajadores activos de menos, sustituidos únicamente en parte por los 8.000 nuevos jubilados inscritos. Y la FLM registró en 1981 una pérdida de 20.000 miembros en el piemonte, al igual que en Lombardía.

En el Congreso de la CGIL, los delegados de los jubilados (138) constituyeron una delegación más numerosa que la de la poderosa organización de los metalúrgicos, que con sus 560.000 inscritos, representa el sindicato de ramo más fuerte del país, y que sólo disponía de 75 delegados. El aumento de las afiliaciones a la CISL se debe sobre todo a los funcionarios, donde se concentran los sectores más derechistas de esta Confederación, que con su clientelismo dificultan una valoración real de las adhesiones. Pero los datos globales no pueden ocultar el hecho de que en 1981 se produjo un descenso de las afiliaciones en determinados ramos industriales, empezando con los dos sindicatos del metal, la FIOM y la FIM. Se trata de un fenómeno prácticamente inevitable a causa de la disminución del número de puestos de trabajo, el no acceso de los jóvenes al mercado laboral y, finalmente, la incapacidad crónica de las direcciones sindicales para ofrecer perspectivas a los trabajadores y a los jóvenes.

El descenso de la militancia de los cuadros obreros es un segundo factor de crisis; los mejores cuadros aún están menos dispuestos que en el pasado a convertirse en permanentes sindicales, pues para un responsable sindical intermedio resulta cada vez más difícil comprometerse a aplicar una línea opuesta a las aspiraciones de los trabajadores. Finalmente, el tercer elemento de crisis reside en el hecho de que el sindicato está perdiendo mucha credibilidad y capacidad de atractivo entre sectores sociales como los parados, los jóvenes y las mujeres, para los que en el pasado apareció como un instrumento capaz de cambiar la sociedad.

La segunda característica de los congresos sindicales fue la débil participación de la base. Es cierto que en el pasado los congresos de base no fueron nunca muy

animados, pero también es cierto que en las asambleas y gracias al buen funcionamiento de los consejos de fábrica, los trabajadores participaron siempre bastante activamente en la vida sindical.

Hay que subrayar aquí una "anomalía" de la situación sindical italiana. En efecto, en los distintos ramos industriales, los trabajadores se adhieren al sindicato unitario (por ejemplo, la FLM en el metal); pero al mismo tiempo no existe la unidad sindical orgánica, ningún congreso unitario, y por tanto en el congreso sólo pueden participar los trabajadores que además se hayan adherido a una de las tres confederaciones (siguiendo con el ejemplo del metal, la FIOM, la FLM y la UILM); los que sólo llevan el carnet del sindicato unitario no pueden participar en modo alguno en los debates. Para captar la dimensión del problema basta con saber que en dos de los principales centros industriales, Turín y Brescia, el 70% de los metalúrgicos sólo se adhieren al sindicato unitario.

La débil participación de la base pudo constatarse en el conjunto de los sectores y en las tres confederaciones. Las direcciones, a todos los niveles, son totalmente responsables de ello, pues no hicieron nada por organizar la participación de los trabajadores, por miedo a un amplio debate democrático en cuyo transcurso habrían tenido que rendir cuentas de sus decisiones y de sus propuestas actuales.

El tercer rasgo característico de los congresos fue el fuerte debate que se produjo en los niveles superiores (regional y nacional). Este debate reveló un importante proceso de reflexión de los cuadros obreros y sindicales intermedios, y su profunda inquietud ante la política de las direcciones centrales. Su oposición se manifestó en torno a determinados aspectos, como la defensa de la escala móvil, el rechazo de la política de rentas, el rechazo del "tope" impuesto sobre las reivindicaciones salariales, el rechazo del "fondo de solidaridad" y la exigencia de que se reduzca el tiempo de trabajo. Esta oposición de izquierda se manifestó en las tres confederaciones.

El debate más vivo, sin embargo, tuvo lugar en la principal confederación la CGIL, que a la vista de su mayoría comunista, se ha considerado siempre como la más monolítica. Este sindicato, por su tradición, por su imagen como sindicato de clase, ha logrado atraerse a la parte más importante de la vanguardia obrera militante y combativa surgida en estos diez años de lucha.

El cuarto rasgo característico de los congresos fue la agravación de las divisiones entre las tres confederaciones: las que aumentaron paralelamente a la reducción de la democracia interna y de las iniciativas de lucha. Estas divisiones han aumentado, aunque durante los últimos meses, igual que ya fue el caso en la FIAT, las confederaciones hayan intervenido siempre de forma unitaria para obligar que los trabajadores aceptaran acuerdos con la patronal desfavorables para ellos. Cada una de las tres confederaciones trataron de destacar, durante el año pasado y particularmente en sus congresos respectivos, sus características particulares y su imagen organizativa por oposición a las demás, con el fin de estimular un relanzamiento de su propia organización. Dada la profundidad del debate en su seno, la propia CGIL es la que tuvo mayores dificultades para llevar a cabo esta operación.

Las diferenciaciones entre las tres confederaciones responden a los intereses específicos de los tres aparatos burocráticos que las controlan, y no a divergencias políticas o estratégicas. Las tres tienen la misma orientación y sólo se diferencian en la manera de aplicarlas o en algunos aspectos específicos.

Naturalmente, los aspectos diferentes que adquiere la política de la CGIL, de la CISL y de la UIL, dependen de su historia, de su composición, de la cantidad y la calidad de la vanguardia obrera a que agrupan. La orientación estratégica común de las tres confederaciones en la fase actual es la siguiente: según ellas, la vía seguida en el transcurso de estos últimos 10 años ya no es practicable (luchas radicales, igualitarismo reivindicativo, formas de lucha duras); toda esta política está hoy en crisis (la UIL dice incluso que el mismo sindicato basado en los consejos ha entrado en crisis; la CGIL y la CISL utilizan a este respecto expresiones menos contundentes, aunque estiman también que se imponen los "reajustes necesarios" con respecto a los consejos de fábrica).

La línea del sindicato debería evolucionar en función de la gravedad de la crisis, dicen. Para superar ésta habría que gestionar junto con las fuerzas capitalistas los procesos de reestructuración, adoptando una actitud "responsable", y sabiendo que los trabajadores tendrán que pagar una parte de esta política. Siempre según las direcciones confederales, al actuar así sería posible limitar los desastres y crear las condiciones para un relanzamiento de la economía capitalista, que a su vez aseguraría la prosperidad y el empleo.

Un lenguaje distinto para la misma política de austeridad

Desde 1978 han cambiado las fórmulas, pero en sustancia se trata de la misma política de austeridad. Las tres confederaciones están también de acuerdo en torno a la política a aplicar en el período actual: se declaran dispuestas a actuar en el sentido de "contener" el coste de la mano de obra, con el fin de favorecer la acumulación capitalista. Aceptan por tanto que el conjunto de las reivindicaciones obreras no rebase el "tope" del 16%, y renuncian por tanto de antemano a cualquier mejora, o siquiera a recuperar el 3% anual de disminución de los ingresos que se registran desde 1978.

Dado que la escala móvil permite recuperar una parte importante de los ingresos erosionados por la inflación (del 60 al 70% según los ramos), ya no queda nada que exigir en los convenios, a menos que se solicite una "atenuación" de la escala móvil para poder exigir cualquier cosa en las plataformas de convenio. Esto puede parecer una discusión de locos, pero se trata, sin embargo, del debate que se desarrolló efectivamente en las direcciones sindicales, con el único fin de despistar a los trabajadores.

El objetivo declarado de estas negociaciones es el de llegar a un acuerdo con la patronal y el gobierno para contener el coste de la mano de obra, aumentar la productividad y "defender el poder adquisitivo de los salarios". El objetivo oculto, pero buscado con todos los medios por las direcciones confederales, es el de aplazar los convenios *sine die*.

Las direcciones sindicales tratan de llevar al movimiento obrero por el camino de una desastrosa política de colaboración con la patronal, partiendo de la tendencia existente entre los trabajadores a no limitarse únicamente a los simples objetivos económicos y a situarse en el terreno del control obrero y del poder. La federación unitaria CGIL-CISL-UIL parte de estas aspiraciones para desvirtuarlas y canalizarlas hacia diferentes fórmulas de cogestión.

La UIL

Vinculada al proyecto de la dirección del PSI de relanzar la socialdemocracia italiana, la UIL es la que invita más abiertamente a los trabajadores a practicar el "realismo" de la colaboración con la patronal. Al tratar de apoyarse en los éxitos obtenidos por las grandes centrales europeas con dirección socialdemócrata, propone una "institucionalización" del sindicato, que éste desempeñe un papel activo en la gestión de las empresas a través de la cogestión, que debe permitirle a la clase obrera influir en la acumulación capitalista y en el desarrollo económico. Para llevar a cabo este proyecto, la UIL se ha encontrado ante todo con el intento de normalización burocrática del sindicato. Dado que es la más débil de las tres confederaciones, semejante normalización podría ofrecerle mayores márgenes de maniobra.

Sin embargo, este sindicato, que durgió después de la Segunda Guerra Mundial a partir de una escisión financiada por la CIA, ha conocido una profunda transformación durante los últimos 15 años, no sólo porque la corriente socialista haya asumido la dirección del mismo, marginando a los componentes burgueses, sino porque ha conocido

una importante renovación de sus cuadros. Aunque desempeñe un papel de chantaje a favor de la moderación permanente, corre el riesgo de entrar en contradicción con sectores de base cada vez que el impulso de las luchas se hace sentir de nuevo.

La CISL

La CISL es el sindicato en que hemos asistido en los últimos años a la evolución más negativa de los cuadros dirigentes. Durante dos decenios, esta confederación se ha visto atravesada por una profunda oposición y una fuerte lucha entre la derecha, cuya base está en los sindicatos de funcionarios, y la izquierda, cuyos bastiones están en la industria. La dirección estaba en manos de una corriente centrista que cuenta con el apoyo de la izquierda, aunque esta (en particular, la federación del metal) haya conservado siempre una posición autónoma con respecto a la confederación.

Durante estos primeros años, el antiguo dirigente de izquierda Prieto Carniti lanzó una gran operación de recomposición de la dirección, que se ha saldado con la participación plena de la derecha en ella. Las corrientes de izquierda, que se habían prestado a esta operación, han quedado muy marginadas y han perdido gran parte de su autonomía de acción. La dirección de la CISL es la que defendió, estos últimos meses, de forma extremadamente tenaz, la necesidad de modificar el sistema de escala móvil, proponiendo la recuperación que garantiza venga determinada, a priori, en función de la tasa de inflación prevista por el gobierno. Además, siguió defendiendo la idea de la formación de un "fondo de solidaridad" para las empresas en crisis, que se crearía a partir de una contribución de los trabajadores con el 0,5% de sus salarios.

La FIM, a su vez, retomó y amplió la propuesta de autogestión presentada por la confederación en una perspectiva de hecho gradualista, con el único resultado de dar cobertura de "izquierda" a la propuesta del "fondo de solidaridad". Cuando la FIM concreta el contenido de la autogestión, sus propuestas aparecen como lo que son: propuestas funcionales para el sistema. En el transcurso de su Congreso nacional, la FIM mantuvo sus distancias con respecto a la confederación, pero al mismo tiempo combatió duramente las posturas de los sectores de izquierda dirigidos por la FIM de Milán. En la dirección, la izquierda sólo se ha visto representada con un 4% de los puestos, mientras que en el Congreso obtuvo entre el 30 y el 40% de los votos.

Las contradicciones de la CGIL

En sus tesis, la CGIL ha retomado las formulaciones reformistas características de comienzos de los años 70. Habla de reforma en el sur, de reorganización de las finanzas públicas, de reorganización y relanzamiento del sector público. La diferencia con respecto al pasado reside en su propuesta central: "la democratización de la economía y el plan de empresa".

La CGIL —y el PCI, que hace la misma propuesta— no ha logrado explicar jamás cómo podría efectuarse la democratización de las multinacionales y la planificación democrática a través del Parlamento y de las regiones, en un mundo capitalista dominado por la competencia y la lógica del beneficio. Pero en virtud de su historia y de las características de sus cuadros, la CGIL no puede permitirse hablar abiertamente de cogestión. Veamos cómo explica el texto de su Congreso lo que debería ser el plan de empresa:

"Esta propuesta intenta una nueva manera de programar y determinar la participación del sindicato en la programación, a través de la elaboración del programa de cada empresa, en el marco de una relación orgánica entre los programas de empresa y los planes sectoriales, intersectoriales y territoriales. Se trata de superar, por un lado, los límites de una gestión de la primera parte de los contratos, al nivel de la empresa, reforzando posteriormente, gracias a este instrumento, la información sobre los programas de las empresas y su verificación, y por otro lado, el carácter indeterminado y precario de la relación entre el sujeto de la programación, las asambleas elegidas y el sistema empresarial. En este sentido, el programa de la empresa debe venir acompañado de una reforma general de la estructura de propiedad de las empresas y del derecho de los accionistas".

Los trabajadores de la FIAT, de la Montedison y de otras tantas fábricas, saben muy bien que se oculta detrás de este lenguaje alambicado y nebuloso: la corresponsabilización del sindicato en el proceso de racionalización de las industrias capitalistas y la expulsión de las fábricas de decenas de miles de trabajadores.

Un proceso de reflexión crítica

La oposición y las críticas a las posiciones de la dirección de la CGIL no sólo proceden de los cuadros que se oponen desde hace años a la política de austeridad, sino también de numerosos cuadros que la han defendido y aplicado durante mucho tiempo con convicción y que se encuentran actualmente con las manos desnudas asistiendo al debilitamiento de un sindicato que han construido pacientemente en la fábrica y en la sociedad. Son los mismos cuadros de base e intermedios los que en la primavera de 1981 presionaron con éxito sobre la dirección de la CGIL para que defendiera la escala móvil, y que en el transcurso de este difícil otoño, han encabezado las luchas contra las medidas del gobierno y las provocaciones de la Confindustria. Son también los que se han opuesto a la dirección de la CGIL cuando ésta dió media vuelta en materia de escala móvil, en vísperas del Congreso nacional, aceptando el "tope" del 16% propuesto por el gobierno.

El proceso de maduración política de esta capa de cuadros sindicales, al igual que de los cuadros críticos de las demás confederaciones, no ha hecho más que empezar. Las críticas que oponen a la dirección son aún muy generales o no afectan sino a puntos concretos; se trata sobre todo de un estado de espíritu frente al desarrollo negativo de la situación actual del sindicato, que no se expresa aún en una línea alternativa.

De ahí que hasta ahora, esta corriente no haya encontrado aún un canal organizativo que le asegure una fuerza adecuada en el sindicato, y sólo ha ejercido un peso decisivo en algunos votos de enmiendas (en defensa de la escala móvil, contra el "fondo de solidaridad", por la exención fiscal de la escala móvil).

La dirección de la FIOM, en abierta oposición con la cúspide de la confederación (Luciano Lama fue recibido con un silencio glacial cuando se dirigió al congreso de esta Federación), reivindicó las luchas del pasado, la batalla de la FIAT, defendió el sindicato de consejos contra todo intento de "normalización"; denundió la política del gobierno y el proyecto de restauración de la patronal, y destacó que los contratos eran el instrumento por el que la clase obrera podía reagrupar sus fuerzas y reconquistar posiciones más favorables.

Pero en cuanto a las propuestas políticas concretas, permaneció completamente subordinada a las opciones de la Confederación. Los congresos de otros sindicatos de ramo de la CGIL, como el de los trabajadores de la construcción y el de los obreros agrícolas, se desarrollaron de forma similar. En el transcurso de estos congresos, además, los representantes de la corriente socialista, que habían preconizado más que nadie la moderación, fueron duramente castigados en el momento de la elección de los organismos de dirección en votación secreta.

Desde entonces, la corriente socialista ha acentuado su chantaje político con miras al Congreso de la CGIL, declarándose de acuerdo con el "tope" del 16% y amenazando con organizar una ruptura en el seno del sindicato. Pero este chantaje ha servido ante todo a los principales dirigentes comunistas de la Confederación, Luciano Lama, Bruno Trenti, y Garavini, para ejercer a su vez un chantaje contra los militantes comunistas de izquierda y los

demás componentes radicales, y para imponerles la propuesta de mediación que hizo Luciano Lama en su informe al Congreso.

La dirección de la CGIL presentó la siguiente propuesta, adoptada por amplia mayoría en el Congreso: La CGIL acepta el "tope" del 16% que corresponde a 45 puntos de recuperación de la escala móvil, estos 45 puntos quedarán exentos de impuestos para los trabajadores, mientras que las alzas correspondientes de los gastos sociales de las empresas correrán a cargo del Estado. Cualquier aumento salarial superior al 16% será sometido a una imposición fiscal más severa (lo que desanima cualquier inclinación a solicitar aumentos salariales); a su vez, los patronos deberán pagar más cargas sociales si no se respeta el "tope" del 16%.



Se trata de una propuesta de política de rentas contra la que se pronunciaron inmediatamente numerosos consejos de fábrica y miles de militantes de la CGIL. En el propio Congreso reinaba un clima de contestación a esta propuesta. Pero los dirigentes comunistas que tradicionalmente aparecían como referencia para los cuadros sindicales de izquierda no presentaron ninguna alternativa. Algunos de ellos, como Galli, secretario de la FIOM, se distanciaron primero y acabaron finalmente a votar a favor de la propuesta.

El hecho de que los delegados en el Congreso fueran en su mayoría permanentes del aparato, al igual que las fuertes presiones de la dirección, permitieron que se votara la moción que proponía "contener el coste del trabajo". El tercer componente de la CGIL (PDUP, DP y sindicalistas de izquierda) no podía, por sí misma, superar este voto, máxime cuando había aceptado la orientación fundamental de los textos de la dirección, no diferenciándose sino en este punto. De todos modos, su moción —muy ambigua políticamente— obtuvo el 10% de los votos y 1/3 de abstenciones.

Una izquierda desorganizada

Podemos sacar una primera conclusión general de estos congresos. Mientras que la base militante y los cuadros intermedios se orientan a la izquierda, bajo la presión de los acontementos, las direcciones confederales, a su vez, se van cada vez más a la derecha. Por otro lado, las conclusiones organizativas de los congresos, dado los procedimientos antidemocráticos de las elecciones y las diversas manipulaciones realizadas con la dirección central frente a las direcciones de las federaciones que se sitúan más a la izquierda, han sido negativas ¿cómo explicar esta ditorsión?

Las direcciones centrales ejercen el control sobre los aparatos y aplican una línea que por muy equivocada que esté tiene el mérito de la claridad política. Por otro lado, los cuadros sindicales críticos son muy numerosos, pero permanecen totalmente desorganizados y no existe ninguna tendencia de izquierda estructurada a nivel nacional, capaz de darles un peso político en la toma de decisiones.

Desde este punto de vista, las direcciones de los ramos más combativos tienen graves responsabilidades, y, una vez más, no han querido luchar por mociones clara-

mente alternativas, terminando plegándose al chantaje de las direcciones confederales. La dirección de la FLM espera poder repetir la operación que realizó cuando se adoptó la primera plataforma de austeridad; se había declarado de acuerdo y después trató de darle una interpretación que cambiaba su contenido. Este pequeño juego sólo permitió limitar los efectos negativos durante un breve período.

Esta vez acepta el "tope" impuesto por el gobierno y las cúspides confederales frente a las reivindicaciones obreras, pero le da una interpretación extensiva, esperando así ganar ciertos márgenes de maniobra para los convenios. Los dirigentes de la FLM pretenden olvidar que Lama, Carniti y Benvenuto propusieron el "tope" y la definición rígida de la política reivindicativa, declarando expresamente que no había que repetir lo sucedido desde la celebración de la asamblea de la EUR, y que la FLM no podía librar ya las mismas batallas de convenios que en el pasado.

Los dirigentes sindicales del tercer componente de la CGIL, y particularmente las organizaciones que se sitúan a la izquierda del PCI, el PDUP y la DP, son también altamente responsables de la inexistencia de una fuerte tendencia de izquierda. Estas fuerzas, que casi siempre han estado presentes en los organismos centrales de la dirección, y que han tenido en varios congresos un número importante de delegados, votaron los textos generales de la dirección y no hicieron nada por proponer una línea alternativa de clase a los trabajadores. En muchos casos, se han preocupado simplemente de conservar sus cargos en los organismos de dirección.

Este período de congresos ha permitido verificar los avances realizados por la Lega Communista Rivoluzionaria (LCR), la sección italiana de la IV Internacional, en su trabajo por construir una tendencia de "lucha de clases" en el interior de las organizaciones sindicales. Los militantes de la LCR han participado en las batallas políticas que se desarrollaron a todos los niveles, y a menudo han sido los elementos motores del vasto movimiento de oposición que hemos descrito.

Los resultados más significativos se obtuvieron en la CGIL-Scuola, donde nuestros camaradas, aliados con una corriente de izquierdas de Toscana (formada por militantes entre los que hay algunos fundadores de este sindicato), presentaron un texto alternativo a nivel nacional. Esta propuesta, que las direcciones centrales trataron de ocultar con todos los medios a su alcance, a los afiliados, obtuvo un 5% de los votos en el Congreso nacional. También aquí se observan las responsabilidades de los delegados del PDUP y de la DP, que ante una propuesta alternativa de clase, prefirieron votar el texto de la dirección nacional.

También en la industria, particularmente en el Metal, el trabajo emprendido desde hace varios años ha permitido que los marxistas revolucionarios desempeñen un papel significativo: en numerosos congresos locales y regionales, a iniciativa de estos militantes se votaron importantes enmiendas o mociones contra los diversos aspectos de la política de austeridad. Esto le permitió a la LCR tener por primera vez delegados en los congresos nacionales en los dos principales congresos sindicales de la metalurgia, la FIOM y la FIM, y contar con numerosos cargos electos en las direcciones locales.

En los debates sindicales, los militantes de la LCR se esforzaron por combatir la argumentación de los dirigentes confederales. Hay que partir de la crisis actual, por supuesto, explicaron, pero precisamente porque la crisis capitalista acentúa todas las contradicciones de este sistema, y amenaza con comportar la liquidación de todas las conquistas obreras, sólo podrá ser superada en función de los intereses de una clase u otra. Es precisamente por esto que el sindicato debe proponer una orientación de clase que no parta de las "compatibilidades" del sistema, y de los "topes" propuestos por la patronal y su gobierno, sino de la defensa de las reivindicaciones de los trabajadores.

Por lo tanto, hay que defender la escala móvil, defender la libertad de negociaciòn de los ramos, rechazar el "tope" salarial y cualquier política de rentas y de pacto social.

Hay que preparar inmediatamente los convenios y no dar ninguna tregua a la patronal, no dejar aisladas las luchas de las empresas amenazadas de cierre, y despido de su personal. Finalmente, la LCR luchó en todos los congresos por la reducción inmediata de la semana de trabajo a 35 horas, único medio para reabsorver el paro y ofrecer trabajo a los jóvenes, y por consiguiente, impedir la desarticulación de la clase obrera y de sus organizaciones.

Frente al cierre de numerosas empresas y de la reducción de su actividad, las direcciones sindicales piden que el Estado subvencione a los capitalistas, e invitan a éstos a orientar su actividad en función de los intereses de la colectividad, pero a fin de cuentas, aceptan siempre las restricciones impuestas en materia de empleo. Los militantes de la LCR, por el contrario, luchan por la nacionalización de estas empresas y el control obrero sobre sus opciones y sobre la reconversión, primer paso para que el movimiento obrero elabore y luche por un plan económico alternativo.

En lo inmediato, la batalla central de todos los militantes obreros de la LCR está destinada a exigir que las direcciones sindicales organicen inmediatamente una consulta de la base, aplazada durante meses para rechazar el pacto social, elaborar plataformas de convenio y lanzar la lucha en torno a los convenios.



Los sindicatos italianos

La **CGIL** (4.582.000 afiliados) es la más importante de las tres confederaciones: los comunistas tienen en ella una mayoría absoluta, pero comparten la dirección con los socialistas y los representantes del "tercer componente": sindicalistas de izquierda, representantes del Partido de Unidad Proletaria (PDUP) y de Democrazia Proletaria (DP). En el Congreso y en los organismos de dirección, los cargos se reparten del modo siguiente: 60% para el PCI, 30% para el PSI, 10% para los demás.

La **CSIL** (3.059.845 afiliados) es una central de origen católico, muchos de cuyos dirigentes están vinculados a la Democrazia Cristiana (DC); algunas federaciones de ramo están dirigidas por corrientes de izquierda; este es el caso, en particular, del sindicato del metal, la FIM.

La **UIL** (1.346.900 afiliados), donde el Partido Socialista (PSI) tiene la mayoría en la Confederación y en su dirección; los demás componentes de la dirección son representantes de dos pequeños partidos burgueses, el Partido Republicano y el Partido Socialdemócrata.

Las tres confederaciones aplican desde 1968 una política de unidad de acción. A comienzos de los años 70, tras el fracaso de la fusión sindical orgánica, formaron una federación unitaria de las tres confederaciones. La dirección de esta federación unitaria está formada por los secretariados de las tres confederaciones. Las decisiones se toman siempre por unanimidad y no por mayoría de votos. Cada uno de los tres componentes tiene de hecho el derecho de veto sobre las decisiones.

La **FLM** (Federación de Trabajadores del Metal) es el sindicato más fuerte, con aproximadamente 1,5 millones de afiliados. Esta federación unitaria está compuesta por la FIOM (500.000 afiliados), afiliada a la CGIL, la FIM (335.000 afiliados) afiliada a la CISL, y la UILM (144.000 afiliados) afiliada a la UIL.

En diciembre de 1981, los resultados de dos elecciones vinieron a simbolizar la clave de la situación política en Gran Bretaña. Sin embargo, a primera vista parecían apuntar en direcciones opuestas.
Las primeras fueron las elecciones parciales parlamentarias de Crosby. El recién creado Partido Socialdemócrata (SDP) obtuvo una contundente victoria. Pero lo que resulta aún más significativo en un período de creciente hostilidad hacia el gobierno *Tory* de Thatcher, es que el partido tradicional de la clase obrera, el Partido Laborista, obtuvo un humillante 9,5% de los votos.
Posteriormente, en el mismo mes de diciembre, se convocaron las elecciones presidenciales del Sindicato Nacional de Mineros (NUM). El candidato del ala izquierda, Arthur Scargill, que probablemente es el dirigente sindical que más ataques ha sufrido por parte de la prensa capitalista, logró una sonada victoria, obteniendo el 70% de los votos.



El balance del Thatcherismo

Jhon Ross

EN ese mismo mes, en una de las luchas obreras más importantes de todo un período, y tras varios años de sufrir derrotas sucesivas, los trabajadores de la British Leyland en Londbridge, Birmingham, protagonizaron una huelga de cuatro semanas contra el aumento de la productividad —un acontecimiento que revelaba claramente la crecientecombatividad de importantes sectores de la clase obrera. Esto ocurrió tras un largo período de retrocesos, y su significado como síntoma vino confirmado por otros acontecimientos de que hablaremos más adelante.

¿Cómo explicar esta combinación de hechos? ¿Cómo es posible explicar que estemos asistiendo al mismo tiempo a una reanimación de las luchas obreras después de un período en que la clase obrera ha sufrido importantes derrotas económicas, y a una serie de victorias electorales importantes del SDP y los liberales y de derrotas del laborismo? La explicación de la **combinación** de todos estos hechos —sin sacar algunos de ellos de su contexto, sino captando su desarrollo y su dinámica global— ha de ser la piedra de toque de cualquier análisis serio de la situación política actual en Gran Bretaña.

Estos avances del SDP y retrocesos del Partido Laborista **no pueden** achacarse a la "deserción de las clases medias", explicación fácil que a veces se oye en las filas de

la izquierda británica. En primer lugar, nadie que tenga un mínimo conocimiento de la composición de clase del país podría pensar que sólo el 9,5% de la población es trabajadora, ni siquiera en una circunscripción tan tradicionalmente *tory* como es Crosby.

Pero incluso si dejamos a un lado este argumento, las elecciones de Crosby no constituyeron, de hecho, ninguna excepción. La alianza electoral del SDP y el Partido Liberal ha obtenido una media del 45% en las tres elecciones legislativas parciales en que se ha presentado. Ha ganado casi la mitad de los escaños en las elecciones municipales celebradas desde su creación. En julio de 1981, el SDP estuvo en un tris de ganar el escaño —que normalmente es superseguro para el Partido Laborista— en la circunscripción eminentemente obrera de Warrington.

Las características históricas de las clases en Gran Bretaña

En realidad, la situación actual sólo puede entenderse si tenemos en cuenta las características históricas fundamentales de las dos clases principales de la sociedad británica.

La clase dominante británica existe en un país totalmente proletarizado, enfrentándose al movimiento sindical más viejo y probablemente más fuerte del mundo. Es *social y económicamente* muy débil en comparación con la clase obrera. Esta clase dominante, sin embargo, cuenta con unas instituciones estatales capitalistas que perviven ya ininterrumpidamente durante 300 años, y domina a una de las burocracias obreras históricamente más derechistas del mundo. Por esta razón, la clase dominante es *políticamente* muy fuerte en relación con la clase obrera.

En cambio, la clase obrera es *social y organizativamente* muy poderosa —por ejemplo, con sus más de once millones de afiliados a los sindicatos—. Pero con su historia ininterrumpida durante 130 años de reformismo de masas y de predominio del imperialismo británico, *políticamente* es muy débil en comparación con la clase dominante.

Este contraste —una clase dominante social y económicamente débil pero políticamente fuerte, y una clase obrera social y organizativamente fuerte pero políticamente débil— el que ha determinado el desarrollo político de Gran Bretaña desde el ascenso del imperialismo británico a mediados del siglo XIX. Esta contradicción sigue desarrollándose y determinando la situación política actual. Su resultado político actual es la ruptura del histórico sistema bipartidista de Gran Bretaña.

En este artículo contemplaremos una vertiente de este proceso, el de la nueva situación en el seno de la clase dominante y su significado para la clase obrera.

El fracaso económico

El contexto inmediato de la crisis y del próximo final del sistema bipartidista en Gran Bretaña es el fracaso del gobierno Thatcher. Este gabinete comenzó su tarea con un plan integrado de medidas económicas y políticas destinadas a resolver los problemas de la clase dominante. Desde el punto de vista económico, se trataba de lanzar una política monetaria extremadamente deflacionista, con el fin de hacer aumentar el paro rápidamente, incluso por encima del nivel impuesto por la recesión internacional.

Al principio, esta línea contó con el apoyo unánime —aunque por razones diferentes— de los tres sectores fundamentales del gran capital británico: el capital bancario, el viejo capital industrial que se basa en la inversión extranjera y en la venta en el mercado interior, y los sectores industriales modernos construidos la primera y la segunda guerra mundial, y que se apoya sobre todo en las exportaciones.

El capital bancario saludó el alza del cambio de la libra, los elevados tipos de interés y la suspensión de restricciones para la inversión en el extranjero. Los beneficios de los bancos alcanzaron bajo Thatcher un récord sin precedentes, y el Barclay's pasó a ser, al menos temporalmente, el banco más grande del mundo, superando incluso a sus rivales norteamericanos.

El capital industrial apoyó al principio a Thatcher porque contaba con que el aumento vertiginoso del paro provocaría un cambio rápido y duradero de la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo y un fuerte incremento de la productividad. Como resultado de ello, Gran Bretaña se encontraría en una posición mejor frente a sus rivales cuando se iniciara la nueva recuperación económica mundial. Por esta razón, el capital industrial estaba dispuesto a correr con los riesgos a corto plazo y con los problemas acarreados por la política de Thatcher : disminución de la producción, quiebra de las empresas más pequeñas y contracción del mercado interior.

Desde el punto de vista político, el objetivo de la ofensiva de Thatcher era el de aumentar su base electoral en el seno de la clase obrera e imponer su política reaccionaria "socavando al laborismo por la base", es decir, machacando con los temas del "combate contra la burocracia del Estado", los males del sindicalismo, los problemas supuestamente suscitados por los inmigrantes negros y la necesidad de que imperen "la ley y el orden".

Esta estrategia se aplicó con bastante éxito en el período que culminó con las mismas elecciones de mayo de 1979. En el sureste y en el centro-oeste de Inglaterra, sectores significativos de trabajadores cualificados votaron a los conservadores, atraídos tanto por la promesa de una reducción de los impuestos como por la demagogia *tory* que ya hemos descrito.

Desde entonces, sin embargo, la política de Thatcher ha sufrido algunos reveses cruciales tanto en el plano económico como en el político. Desde el punto de vista económico está claro que, debido en particular a la política deflacionista de Reagan en los Estados Unidos, cualquier recuperación de la economía mundial será menor y tardará más en producirse que lo previsto por el capital industrial británico. Esto significa que la recesión de la economía británica será más larga y más profunda que lo que se anunció. De hecho, la disminución de la producción industrial bajo Thatcher ha sido más rápida que incluso en el período en que comenzó la crisis de 1929.

Pero es más significativo aún el hecho de que a pesar del bajón económico, a pesar de las indudables ventajas obtenidas por los empresarios, la recesión no ha logrado quebrar la resistencia de la clase obrera con la profundidad que requiere la estrategia de Thatcher para tener éxito.

Los beneficios de la industria británica aumentaron en un 10% entre el segundo y tercer trimestre de 1981, frente al 0,5% de incremento del Producto Nacional Bruto; la renta real por familia ha descendido en un 5,5% desde que alcanzó su punto más alto en 1979-1980; y las jornadas perdidas por causa de huelga descendieron, de 12 millones en 1980, a unos 4 millones en 1981. Pero estas ventajas aún son insuficientes para satisfacer las necesidades del capital británico, pues la resistencia de la clase obrera no se ha quebrado significativamente.

Gran parte de los trabajadores y la gran mayoría de los comités de empresa (shop stewards) supieron resistir la derrota de los trabajadores de la British Leyland, en noviembre, cuando la burocracia sindical saboteó una huelga nacional. Inmediatamente después se produjo la huelga de cuatro semanas en la British Leyland de Longbridge, contra el aumento de la productividad.

A la rotunda victoria de Scargill en las elecciones presidenciales del sindicato minero le siguió la decisión de la ejecutiva y de los delegados de rechazar un aumento salarial del 9,1%. En la Ford, en enero de 1982, la oferta salarial de la patronal sólo fue aprobada por un margen muy escaso, a pesar de la inmensa campaña lanzada a su favor por la dirección sindical. El tope salarial del 4% declarado por el gobierno para el sector público se rebasó practicamente antes de que se anunciara, con la oferta del 7% para los trabajadores manuales de los ayuntamientos. El sindicato de ferroviarios proyecta una huelga en torno a los ritmos y salarios, y los mineros amenazan con la misma medida.

Mientras, en el terreno económico, la demanda crediticia del sector público, fuente de inflación, es más alta que nunca

bajo el gobierno laborista; y hay escasas probabilidades, o ninguna, de que el gobierno cumpla su objetivo de reducir el aumento de precios anual por debajo de la tasa del 10%. En los últimos meses, la resistencia obrera y sindical frente al gobierno ha aumentado y no descendido, como se demuestra en la British Leyland, la Ford, como lo demuestran los ferroviarios y los mineros.

En estas circunstancias, hay dos cosas claras en la política económica del gobierno Thatcher. En primer lugar, en una recesión mucho más profunda y prolongada que lo previsto por el capital industrial, el gobierno no ha logrado quebrar la resistencia de la clase obrera. Además, el gran capital industrial se enfrenta ahora a grandes problemas derivados del bajón de las ventas, de la escasez de mercados, de la devolución de fuertes deudas a los bancos con un elevado tipo de interés, y de las dificultades de la exportación, debidas al elevado cambio de la libra.

Por consiguiente, está claro que cualquier intento de llevar a cabo el proyecto inicial de Thatcher mediante el simple incremento del desempleo comportaría una caída tan fuerte de la producción, junto con unos cinco millones de parados en términos reales (cuatro millones según las cifras oficiales), que asestaría un profundo golpe estructural a largo plazo a la economía y amenazaría con provocar una situación incontrolable en el plano político. En estas condiciones, el capital industrial está exigiendo, y Thatcher ha empezado ya a ponerlo en práctica hasta cierto punto, que se relance un poco la economía para aumentar la producción.

Pero este relanzamiento no es suficiente, ni está destinado a reducir el paro. La burguesía industrial quiere aumentar la producción y las ventas, es decir, los beneficios, y no reducir el número de parados. Al contrario, a menos que comporte consecuencias políticas peligrosas, cuantos más parados haya tanto mejor, desde el punto de vista del capital industrial, pues esto es un factor de intimidación para los que tienen empleo. Aumentar la producción **sin** aumentar el nivel de empleo es actualmente el objetivo del sector más fuerte del capital o de las fuerzas políticas como el ala de Heath en el Partido Conservador, más allá de su palabrería en torno a la "preocupación por los parados".

El intento de llevar a cabo esta política pasa por el aumento de la producción combinado con un incremento sustancial de la productividad, lo que ayudará a incrementar la tasa de explotación y mantener el nivel de desempleo. De ahí que la clase dominante combine actualmente sus ataques en el plano salarial con una ofensiva en el terreno de la productividad, y de ahí que la resistencia de la clase obrera, como en la British Leyland, en la Ford y entre los ferroviarios, se haya expresado en forma de luchas defensivas en torno a esta situación.

Ventajas amenazadas

El fracaso del proyecto del gobierno Thatcher de quebrar totalmente la resistencia obrera mediante el paro masivo se interrelaciona con este nuevo cambio exigido por el capital industrial, constituyendo el segundo fracaso económico decisivo del gobierno.

El caso es que precisamente porque el gobierno Thatcher no ha logrado derrotar a la clase obrera durante la recesión, no hay ninguna garantía de que las ventajas económicas obtenidas puedan mantenerse durante la fase de recuperación, por muy limitada que esta sea. Aunque el paro no



descienda los trabajadores con empleo verán cómo disminuyen las regulaciones de empleo. Verán que las carteras de pedidos se llenan, que los empresarios aumentarán la producción de bienes para vender, que disminuirán los stocks y los productos no vendidos.

En pocas palabras, e independientemente de lo que suceda en el terreno político —lo que también repercutirá en ello, sin duda—, la relación de fuerzas tenderá a desplazarse un poco a favor de los trabajadores.

Por mucho que actualmente las luchas directas de la clase obrera se encuentren en un nivel inferior al de hace algún tiempo, no está garantizado que esta situación permanezca así. Las luchas actuales son básicamente defensivas frente a los recortes salariales. Pero un relanzamiento económico, por limitado que sea, puede variarlo todo.

En este sentido, lo que puede suceder se reveló gráficamente en British Leyland y en Ford. Los trabajadores de British Leyland, y en particular los de su factoría más grande, la de Longbridge, han encajado durante varios años toda una serie ininterrumpida de importantes derrotas. La empresa elaboró una ofensiva bien planificada que no sólo perseguía un objetivo general, sino también uno muy concreto en Longbridge. Se trataba de alanar el camino con miras a introducir el nuevo modelo, el *Metro,* que es el único realmente atractivo, y por tanto potencialmente beneficioso, de la gama de British Leyland, siendo así una de las claves del futuro financiero de la empresa. Este modelo se produce en Longbridge, y de ahí la ofensiva particularmente severa de la patronal en esta factoría antes de introducirlo.

En esta ofensiva, la empresa contó con la ayuda de la dirección sindical en esta factoría, dominada por el Partido Comunista. Según el mejor modelo eurocomunista, los dirigentes del PC adoptaron una política de bancarrota a ultranza (en el sentido literal y metafórico), colaborando con la empresa para que British Leyland fuera rentable. En cambio, en algunas otras factorías de la empresa, particularmente en su otra gran planta de montaje en Cowley, había una dirección sindical más combativa. Así, por ejemplo, mientras en Longbridge el presidente del comité de empresa sucumbió ante una campaña de la empresa, en Cowley una campaña similar no tuvo ningún resultado.

La oferta salarial de Leyland en 1981 estaba destinada, entre otras cosas, a enfrentar entre sí a distintos sectores obreros. Ofreció un pequeño aumento del salario base, que es lo que percibirían la mayoría de trabajadores. Pero ofreció un mayor margen para las primas de productividad y producción. Sin embargo, al principio hubo una fuerte oposición por parte de los trabajadores (cerca del 95% votaron en contra en las asambleas), si bien la burocracia sindical nacional consiguió finalmente que se aceptara, en Longbridge, esta oferta. En Cowley, sin embargo, fue rechazada.

A pesar de todo ello, en Longbridge, cuando la dirección intentó aplicar la primera parte de las medidas de aumento de la productividad, estalló inmediatamente la huelga de cuatro semanas. Al producirse justo antes de las Navidades, esta acción mostraba un ánimo realmente combativo entre los trabajadores.

Algo parecido ocurrió en la empresa Ford. En este caso había también direcciones sindicales muy diferentes entre las distintas factorías. La factoría de Merseyside Halewood ha tenido tradicionalmente una dirección sindical combativa y ha ocupado una posición de fuerza dentro de la empresa. En cambio, la factoría de London Dagenham tenía una dirección dominada por el PC y una historia de graves derrotas.

En el transcurso de la ofensiva de la empresa en torno a la productividad, el año pasado, Halewood protagonizó una serie de luchas con éxitos significativos, mientras que Dagenham sólo sufrió derro-

tas.

Estas luchas revelan los procesos que se dan en importantes sectores de la clase obrera. Pese a los graves retrocesos, los núcleos fundamentales de las direcciones sindicales de empresa permanecen intactos y han empezado a conocer un importante proceso de recomposición. Hay un ambiente de odio y resentimiento creciente frente a la política de la patronal y del gobierno Thatcher. Lo único que se echa en falta es la convicción de los trabajadores de que pueden vencer. Así, el mínimo signo de relanzamiento económico puede hacer que sectores importantes de la clase obrera piensen que ha llegado la hora de defenderse y quizás reconquistar algunas cosas que se han perdido en los últimos dos años.

Por consiguiente, los indicios de una recuperación de la combatividad sindical son particularmente peligrosos para la burguesía, desde el punto de vista económico. Muestran que a pesar de los salvajes ataques de Thatcher contra los trabajadores, no ha logrado destruir su capacidad de respuesta a nivel sindical, lo que tiene que ver con su fuerza social y organizativa. Por lo tanto, sin tomar algunas iniciativas importantes en otros terrenos, el lanzamiento de una recuperación económica, aunque limitado, podría comportar que la clase obrera recuperara las ventajas obtenidas por el capital en el último período y que surgieran los elementos de una crisis política.

De este modo está bastante claro que la política económica de Thatcher ha llegado a un callejón sin salida y ha fracasado como política para la burguesía. Los sectores clave del capital industrial se distancian de Thatcher y de su política. Esto se expresa en la actividad del ala Heath en el Partido Conservador, que ha lanzado algunas "rebeliones parlamentarias", y en el apoyo que recibe la coalición electoral del SDP y los liberales.

El fracaso político del Thatcherismo

En el terreno político, sin embargo, y a diferencia del económico, la situación no es tan cruda para la burguesía. Es cierto que la propia Thatcher, y en un sentido más básico el Partido Conservado en su conjunto, han fracasado. El verdadero golpe de gracia lo recibió su política con las grandes explosiones de los guettos durante el verano de 1981. Antes de las elecciones de 1979, Thatcher insistía machaconamente en los temas de la "ley y el orden" y de los gritos de alarma en torno a los negros e inmigrantes. Así, los "motines negros", como calificó la prensa de masas los acontecimientos del año pasado, debieron haber sido la gran ocasión para la política de dureza de los *tories*.

De hecho, desde el punto de vista técnico, el gobierno logró un avance significativo en la represión. Por primera vez se autorizó el uso en Gran Bretaña de balas de plástico, blindados, etc. (aunque en Irlanda del Norte venían utilizándose hacía tiempo).

Pero desde el punto de vista político, los acontecimientos fueron un desastre para el gobierno. SU política de paro masivo soliviantó tanto a la población que la mayoría consideró que las doctrinas y la política económica del gobierno fueron en buena parte responsables de la situación. Un número significativo de gente expresó realmente su simpatía por los "amotinados". La encuesta oficial Scarman en torno a los acontecimientos se vio forzada a introducir algunas críticas verbales a la policía, aunque apoyando evidentemente su intervención global y allanando el camino para la represión futura.

La clase dominante no se asustó particularmente por las explosiones de los guettos en sí mismas. Pero se preocupó seriamente por el hecho de que el gobierno Thatcher no pudo movilizar a la opinión pública frente a ellas. Además le preocupó la posibilidad de que estas protestas violentas, las más explosivas que se producen en Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial, pudieran contagiarse a sectores más amplios de la población, y particularmente al movimiento obrero. Esta combinación despertaba el fantasma de que la política de Thatcher podía desembocar en conflictos sociales incontrolables.

Además de este revés político, el gobierno se vio confrontado con otra serie de problemas graves. En el Norte de Irlanda, la campaña de apoyo a los huelguistas de hambre del bloque H socavó la autoridad de la dirección política reformista de la población nacionalista y fue una sacudida para la estabilidad dentro del Sur neocolonial de Irlanda. La oposición al armamento nuclear británico alcanzó también un nivel sin precedentes, dando pie a las manifestaciones antiguerra más grandes de la historia de Gran Bretaña.

Pero lo que era más inaceptable para la clase dominante: el hecho de que la política de Thatcher fomentaba una importante radicalización de los cuadros del Partido Laborista. El producto de ello, el "Bennismo" (Anthony Benn es el dirigente del ala izquierda del Partido Laborista), es un fenómeno ya conocido.

Las consecuencias de ello para la clase dominante estaban claras. Significaba que el Partido Laborista aparecía demasiado inestable, demasiado débil, como para permitirle formar por sí solo un gobierno. Esto le privaba a la clase dominante de su alternativa gubernamental normal en el sistema bipartidista británico. Si la única alternativa frente al gobierno fracasado de Thatcher es un Partido Laborista inestable, la situación se hace peligrosa para la clase dominante. Por tanto, había que hacer algo.

Tanto el problema como la solución eran previsibles. Las tradiciones de respeto hacia las instituciones del Estado burgués, de racismo, de falta de solidaridad real con las capas más oprimidas de la clase obrera, han penetrado profundamente en la clase obrera británica y en el movimiento obrero, por obra del imperialismo británico y de la burocracia obrera reformista. En esto era en lo que quería apoyarse Thatcher.

Pero hay una tradición aún más profundamente arraigada que aquellas: durante casi dos siglos, la mayoría de la clase obrera en Gran Bretaña ha considerado al Partido Conservador como **el** enemigo por excelencia. La clase obrera construyó sus primeras organizaciones embrionarias al calor de las luchas contra los gobiernos *tories*, durante y después de las guerras contra la Revolución francesa. Se amotinó contra un gobierno *tory* para imponer la promulgación de la primera ley de reforma electoral en 1832. Después de un breve período de acceso a la independencia de clase bajo el Cartismo, pasó después en su mayoría, a apoyar a los liberales contra los *tories*, durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Finalmente, cuando la clase obrera logró crear el Partido Laborista como fuerza electoral de masas, después de 1918, de nuevo se encontró con el Partido Conservador como principal oponente parlamentario.

La identificación del Partido Conservador como el principal enemigo histórico de la clase obrera es, desde el punto de vista del socialismo revolucionario, uno de los problemas básicos que hay que resolver. Es la burocracia laborista, y no el Partido Conservador, quien hace de espina dorsal del sistema político del imperialismo británico y de la clase capitalista.

Pero desde el punto de vista de Thatcher, esto constituye un obstáculo insuperable. Desde que el movimiento laborista se convirtió en una fuerza de masas, el Partido Conservador puede gobernar apoyándose en el miedo y en las grandes derrotas de la clase obrera, como lo hizo tras la primera guerra mundial en general y tras la derrota de la Huelga General de 1926 en particular. En períodos de mayor prosperidad puede gobernar mediante concesiones a las masas que aislen políticamente a la vanguardia de la clase obrera como lo hizo de 1951 a 1964. Pero **no puede** ganarse el grueso de la clase obrera para una alianza histórica estable o como base de apoyo para "los *tories*". Al margen de las ventajas a corto plazo que pudiera obtener en otros terrenos, Thatcher siempre ha estado condenada, en condiciones de crisis social, a chocar con este obstáculo político. Y esto es lo que está haciendo, como lo hizo Edward Heath, aunque de manera distinta, en 1970-74. De ahí el riesgo de que se de una situación peligrosa para la clase dominante.

Pero los mismos elementos de la situa-

ción que conforman el problema señalan también el camino natural para buscar una solución para la clase dominante. Es decir: crear otro partido capitalista, preferiblemente uno con una imagen más de izquierda —que no sea un partido de los odiados *tories* ni de la bazofia histórica en que se habían convertido los liberales—, pero de todos modos un partido que aplique la línea política de la burguesía.

De este modo, la misma identificación de *"los tories"* con el enemigo por excelencia a los ojos de la clase obrera, y que le crea tantos problemas al gobierno Thatcher, operaría a favor de la clase dominante. Educada durante decenios por la burocracia a no ver en el capitalismo, sino en el Partido Conservador, al enemigo de clase, la clase obrera deja la vía libre para un avance contundente del SDP a costa del Partido Laborista.



Y esto es precisamente lo que ocurre de hecho en Gran Bretaña, y es lo que explica los factores aparentemente contradictorios de la situación política actual que destacamos al comienzo del artículo. El hecho es que debido a la fuerza social y económica de la clase obrera, y a su debilidad política, amplios sectores de los trabajadores que sufren la política de Thatcher pueden, y lo harán, votar por el SDP.

Lo que representa ante todo el ascenso de este partido no es el desplazamiento de "las clases medias", sino el fracaso político total de las perspectivas políticas ofrecidas históricamente por el reformismo laborista en sus 80 años de existencia. Al negarse a entablar una lucha decidida con el capital, limitándose a una lucha con el "enemigo conservador", la burocracia laborista se ha desarmado a sí misma, y al movimiento obrero en su conjunto, frente a las ofensivas de un partido capitalista y de la clase dominante.

Es más, este proceso aún no ha concluído. El objetivo del SDP y de los liberales no consiste en particular en formar un gobierno de coalición SDP-Partido Liberal tras las próximas elecciones. Tanto ellos como la clase dominante calculan que ningún partido, y en particular ningún partido capitalista, será lo suficientemente fuerte como para gobernar por sí solo frente al movimiento obrero actual. Sin un cambio fundamental del sistema político, un gobierno SDP-Partido Liberal no sería más que otra administración capitalista. Su popularidad se desvanecería rápidamente, haciendo que los desilusionados marcharan hacia un Partido Laborista potencialmente de izquierdas.

El verdadero objetivo del SDP y los liberales, con la ayuda del ala Heath del Partido Conservador, consiste en cambiar el conjunto de la estructura política en Gran Bretaña, poniendo fin al actual sistema bipartidista, mediante la instauración de la representación proporcional en las elecciones. Dado que el Partido Laborista no ha obtenido jamás el 50% de los votos, y que nunca podrá acercarse a este porcentaje con su actual línea reformista, la burocracia laborista batallará para convencer a la clase obrera de que sólo hay "dos alternativas": o bien nos quedamos "permanentemente en la oposición", o bien aceptamos formar coalición con el SDP, justificándola con el deseo de "dejar fuera a los *tories*".

Por supuesto, este gobierno sería una catástrofe para el movimiento laborista. El Partido Laborista tendría que asumir la principal responsabilidad en la aplicación de la política de austeridad en que se basaría la formación de este gobierno, y su apoyo electoral descendería aún por debajo de los niveles actuales, que son más bajos que nunca.

Pero es precisamente este gobierno de coalición con el SDP la única perspectiva política que se plantean sectores clave de la burocracia laborista. El ex dirigente del partido, Callaghan, ya ha sugerido públicamente la idea. De hecho es la política de un ala muy fuerte de la burocracia sindical —la de la dirección Duffy-Boyd, del Sindicato Mixto de Trabajadores de Ingeniería (AUEW), y la de Frank Chapple, del Sindicato de Electricistas (EPTU)—. No cabe duda que se ganarán el apoyo de otros en su debido tiempo. Por supuesto que se declararán disgustados con los "traidores" del SDP, pero explicarán que hay que dejar fuera del gobierno a los *tories* y a Thatcher cueste lo que cueste.

Si la burguesía misma opta o no por este gobierno dependerá de toda una serie de cuestiones que aún no están resueltas. Podría ser una opción muy útil en caso de que haya un aumento de las luchas obreras, y si la alianza directa con la burocracia parece capaz de frenarlo. Pero a quién favorecerá la burguesía para formar el próximo gobierno depende también de otros factores internacionales, económicos y políticos en general. Depende también de la clase obrera y no únicamente de la burguesía.

Es más, antes de que tal gobierno pueda aparecer como una alternativa creíble, hará falta algo así como una guerra civil dentro del Partido Laborista. Por consiguiente, esta cuestión no está aún en el orden del día y no lo estará hasta que no se alcancen otros objetivos políticos.

Pero incluso antes de que la clase dominante tenga que decidir qué opción gubernamental va a apoyar antes y después de las próximas elecciones, la formación del SDP le proporciona a la clase dominante toda una serie de ventajas importantes. A la burocracia laborista y sindical le da un fuerte impulso en su intento de que el movimiento laborista de un giro a la derecha. Los avances electorales del SDP se utilizan para justificar la caza de brujas contra la izquierda dentro del Partido Laborista, mientras que la línea política se desplaza aún más a la derecha so pretexto de "evitar el extremismo".

Si el próximo gobierno está formado por el SDP y los liberales, o por el SDP, los liberales y los *tories*, o incluso por los *tories* a secas, la política derechista del laborismo



se justificará sobre la base de la necesidad de "separar al SDP de los *tories*" o de "impedir que el SDP forme coalición con los *tories,* lo que mantendrá a éstos en el poder", etc.

No es el Partido Conservador, sino el SDP el principal instrumento político táctico actual de la burguesía. El SDP es su principal herramienta para alterar la relación de fuerzas dentro del movimiento obrero, reforzando el poder de la burocracia laborista en general y de sus alas más derechistas en particular, y para hacer frente y derrotar finalmente al conjunto de la clase obrera.

Al margen de quién vaya a formar el próximo gobierno —esta es una cuestión totalmente secundaria en comparación con la perspectiva a largo plazo—, la piedra angular de la política de la burguesía es el SDP y la instauración de la representación proporcional con el fin de consolidar la existencia de este partido. Este es un hecho fundamental de la situación política actual en Gran Bretaña.

Frente a esta ofensiva, que al final cambiará de arriba abajo el sistema político británico, la burocracia laborista no tiene ninguna respuesta viable. El aspecto positivo de la situación, la politización de una importante minoría de la clase obrera bajo el impacto de la crisis, será objeto de otro artículo.

¿TE FALTA ALGUN NUMERO? SUSCRIBETE



Suscríbete a las publicaciones de la L.C.R.: Combate, Comunismo, Inprecor

